

BOLETIN



OFICIAL

DE LA

PROVINCIA DE SEGOVIA

Inmediatamente que los señores Alcaldes y Secretarios reciban este Boletín, dispondrán que se fije en el sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. Los señores Secretarios cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, de conservar los números de este Boletín, coleccionados ordenadamente para su encuadernación, que deberá verificarse al final de cada año.

SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

En la Capital.—Trimestre, pts. 5,00
Fuera de id.— — — — — 6,25
Número suelto..... 0,25

PRECIOS DE INSERCIÓN

Los edictos y anuncios oficiales y particulares que sean de pago satisfarán por línea... 0,80

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines Oficiales se han de remitir por todas las autoridades al Gobernador respectivo, por cuyo conducto se pasarán a los mencionados periódicos. Se exceptúa de esta regla al Excmo. Sr. Capitán General.

Los anuncios particulares y avisos de suscripciones se reciben en la Imprenta Provincial (Establecimientos Provinciales de Beneficencia).

2737

Gobierno Civil de la Provincia

CIRCULAR

Por no haber remitido los Sres. Alcaldes de los pueblos que a continuación se citan, a la Jefatura del Servicio Agronómico nacional de esta provincia, los recibos y listas cobratorias del impuesto de plagas, a pesar de haber transcurrido con exceso los plazos fijados por dicha Jefatura, y a propuesta de la misma, he acordado imponer a dichas autoridades, una multa de quince pesetas, que deberán hacer efectivas en este Gobierno civil en el plazo de diez días.

Los mencionados pueblos son:

Alconada de Maderuelo, Aldehuela del Codonal, Arcones, Arroyo de Cuéllar, Barbolla, Campo de San Pedro, Cascajares, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Cilleruelo de San Mamés, Coca, Codorniz, Collado Hermoso, Condado de Castilnovo, Cubillo, Chañe, Duratón, Fresno de Cantespino, Fuentepelayo, Fuentes de Cuéllar, Fuentesoto, Garcillán, Hinojosa del Cerro, Hontalbilla, Juarros de Riomoros, Labajos, La Losa, Languilla, La Lastrilla, Linares del Arroyo, Lovingos, Marazoleja, Melque, Montejo de Arévalo, Montuenga, Moral, Nava de la Asunción, Pajares de Fresno, Pedraza, Pelayos del Arroyo, Puebla de Pedraza, Riaguas de San Bartolomé, Riaza, La Salceda, Sanchonuño, San Ildefonso, Santo Domingo de Pirón, Sequera de Fresno, Sotillo, Sotosalbos, Torrecaballeros, Trescasas, Turégano, Valdeprados, Valtiendas, Valvieja, Vegafria, Villaseca, Villaverde de Iscar, Yanguas de Eresma, Zamarramala.

Lo que se hace público en este periódico oficial para conocimiento de los interesados, quedando es-

tos advertidos que se les da un nuevo plazo de diez días para la remisión de dichos documentos, caso de no verificarlo se les exigirán responsabilidades más graves.

Segovia, 2 de Septiembre de 1931.

EL GOBERNADOR,
Hipólito González Parrado

2739

SECRETARIA

NEGOCIADO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

El Ilmo. Sr. Director general de Acción Social, en oficio fecha 21 de Agosto último, ha dispuesto sea publicada en este BOLETÍN OFICIAL de la provincia, como se hace, la relación de concesionarios de subsidios de familias numerosas, de esta provincia.

«Excmo. Sr.: Vistos los expedientes incoados por los señores que más adelante se mencionan, y teniendo en cuenta, que tanto en el fondo como en la forma, se ajustan a las disposiciones que regulan el Subsidio a las familias numerosas,

Este Ministerio ha acordado otorgar a los mismos la calidad de beneficiarios de dicho Subsidio en concepto de obreros, con los derechos que se especifican a continuación:

Los beneficios de los artículos 4.º (caso 1.º), 7.º y 8.º, a los obreros padres de ocho hijos:

6.355-43.410. D. Diego de las Heras Lázaro.—Segovia, San Quirce, 8, bajo.

6.356-44.602. D. Segundo Hernanz García.—Segovia, José Zorrilla, 168, principal.

6.357-45.675. D. Andrés García Arranz.—Aldeonte (Segovia).

6.358-1.794. D. Hermenegildo Ortega Gómez.—Casillas (Segovia).

6.359-32.300. D. Nicanor López Maderuelo.—Fuente el Olmo de Fuentidueña (Segovia).

6.360-39.348. D. Mariano Merino Tornero.—Fuente el Olmo de Fuentidueña (Segovia).

6.361-41.129. D. Luis Pérez Fernández.—Fuentepelayo (Segovia) calle Rua.

6.362-45.600. D. Epifanio Olmos Otero.—Navalmanzano (Segovia).

6.363-45.611. D. Germán Bernabé Moreno.—Pedraza (Segovia), Barrio Rades.

Los beneficios de los artículos 4.º (caso 2.º), 7.º y 8.º, a los obreros padres de nueve hijos:

6.379-45.605. D. Eugenio Rosa Herrero.—Carbonero el Mayor (Segovia), Espejo, 18.

6.380-24.357. D. Basilio del Río García.—Nava de la Asunción (Segovia), Real.

Los beneficios de los artículos 4.º (caso 3.º), 7.º y 8.º, a los obreros padres de diez hijos:

6.382-18.058. D. Cándido Gómez Gómez.—Trescasas (Segovia), Fraguas, 6.

6.383-43.372. D. Cirilo Miguel Herredero.—Zamarramala (Segovia), Cid, 6.º

(Gaceta del 13 de Agosto.)

En su consecuencia, ordeno a los Alcaldes, comuniquen a los interesados por escrito dicha resolución, manifestándoles al propio tiempo, el número y fecha de la orden; fecha de la Gaceta en que se publica, y número que le corresponde en la relación de beneficiarios, indicándoles asimismo que la cantidad correspondiente al Subsidio que se les concede, es de tantas pesetas, las que harán efectivas en la Caja de Previsión Social de Castilla la Vieja, domiciliada en Burgos.

También le ruego ordene, que si alguno de los beneficiarios no reside en el pueblo que se cita, o ha trasladado su domicilio, lo comunique al Ministerio.

Segovia, 3 de Septiembre de 1931.

EL GOBERNADOR,
Hipólito González Parrado

El Ilmo. Sr. Director general de Acción social, en oficio fecha 21 de Agosto último, ha dispuesto sea publicada en este BOLETÍN OFICIAL de la provincia, como se hace la relación de concesionarios de subsidios de familias numerosas de esta provincia.

«Excmo. Sr.: Vistos los expedientes incoados por los señores que más adelante se mencionan y teniendo en cuenta que, tanto en el fondo como en la forma, se ajustan a las disposiciones que regulan el subsidio, a familias numerosas,

Este Ministerio ha acordado otorgar a los mismos la calidad de beneficiarios de dicho subsidio, en concepto de obreros, con los derechos que se especifican a continuación:

Los beneficios de los artículos 4.º (caso primero), 7.º y 8.º a los obreros padres de ocho hijos:

7.622-43.583. D. Nicolás Arribas

Martínez.—Ayllón (Segovia), Dr. Tapiá, 5.

7.623-44.944. D. Moisés Martín Martín.—Fuente de Santa Cruz (Segovia), Real, 35.

7.624-44.950. D. Agustín Sanz Sastre.—Palazuelos de Eresma (Segovia), Real, 62.

Los beneficios de los artículos 4.º (caso 2.º), 7.º y 8.º a los obreros padres de nueve hijos:

7.634-37.381. D. Damián Tapia Aceves.—Segovia, Plazuela de la Tierra, número, 2.

7.635-9.485. D. Serapio Bermejo García.—Segovia, Plaza de la Tierra, 5.

7.636-6.646. D. Lorenzo Galindo Prados.—Moraleja de Coca (Segovia), Imperial, 22.

7.637-2.728. D. Antonio Fresnillo Valle.—Sotillo (Segovia), Fresneda.

(Gaceta del 16 de Agosto.)

En su consecuencia ordeno a los Alcaldes, comuniquen a los interesados por escrito dicha resolución, manifestándoles al propio tiempo el número y fecha de la orden; fecha de la Gaceta en que se publica, y número que le corresponde en la relación de beneficiarios, indicándoles asimismo que la cantidad correspondiente al subsidio que se les concede, es de tantas pesetas, las que harán efectivas en la Caja de Previsión Social de Castilla la Vieja, domiciliada en Burgos.

También le ruego ordene, que si alguno de los beneficiarios no reside en el pueblo que se cita o ha trasladado su domicilio, lo comunique al Ministerio.

Segovia, a 3 de Septiembre de 1931.

EL GOBERNADOR,
Hipólito González Parrado

2738

El Ilmo. Sr. Director general de Acción Social, en oficio fecha 26 de Agosto último, ha dispuesto sea publicada en este BOLETÍN OFICIAL de la provincia, como se hace, la relación de expedientes denegados del Subsidio de familias numerosas, de esta provincia.

«Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes incoados por los señores que en ésta se relacionan solicitando los beneficios del Real decreto de 30 de Diciembre de 1926,

Este Ministerio se ha servido denegarlos por las causas que a continuación se mencionan.

674-45.554. Don Mariano Alonso García.—Aguilafuente (Segovia), An-

gosta del Cubón. Por tener solamente seis hijos menores.

675-44.777. D. Felipe Nuño Martín. Cedillo de la Torre (Segovia). Eras, 16, por trabajar por cuenta propia.

676-19.886. D. Lorenzo Gómez Martín.—Fuente el Olmo (Segovia), Real, 19, por tener solamente siete hijos menores.

Lo que participo a V. E. para su conocimiento, efectos y traslado a los interesados. Madrid, 19 de Agosto de 1931.—Francisco L. Caballero.

(Gaceta del 24 de Agosto).

En su consecuencia, ordeno a los Alcaldes respectivos comuniquen a los interesados por escrito dicha resolución, manifestándoles al propio tiempo la fecha de la orden, fecha de la Gaceta en que se publica, y número que le corresponde en la relación de denegados.

También le ruego ordene, que si alguno de los interesados a quienes se les ha denegado el subsidio no residiera en el pueblo que se cita, o ha trasladado su domicilio, se oficie a los Alcaldes respectivos para el cumplimiento de esta disposición.

Segovia, 3 de Septiembre de 1931.

EL GOBERNADOR,

Hipólito González Parrado

2741

Secretaría.—Circulares

El Alcalde de Otero de Herreros me comunica que el día 13 de Agosto último, al vecino de dicho pueblo José López de Frutos, le desapareció de la llamada Sierra, en aquél término municipal, una res de las señas siguientes que se encontraba pastando: un choto, pelo retinto, edad nueve meses, cuerna veleta, bragado, colillo.

Lo que se hace público en este BOLETÍN OFICIAL para general conocimiento y para que caso de ser habida puedan entregarla a su dueño.

2760

Según participa a este Gobierno civil el señor Comandante del puesto de la Guardia civil de Sacramenia, el día 30 del pasado Agosto fué encontrada por dicha fuerza en el lugar denominado La Ladera, una escopeta de las señas siguientes:

Escopeta de un cañón, fuego central, calibre 16, número 26.388 y portaescopeta de cuero.

Lo que se hace público en este periódico oficial para conocimiento de su dueño.

2751

Según participa a este Gobierno civil el Comandante del puesto de la Guardia civil de Navas de Riofrío, el día 30 del pasado mes de Agosto, fué encontrada por una pareja de la Guardia civil en la carretera de Riofrío a San Ildefonso, una manivela de puesta en marcha de un automóvil, que al mismo tiempo es llave de tuercas.

Lo que se hace público en este periódico oficial para conocimiento de quien demuestre ser su dueño, estando depositada en dicho puesto de la Guardia civil.

2752

Según participa a este Gobierno civil el Comandante del puesto de Martín Muñoz de las Posadas, al vecino de aquella localidad Mariano

Monje Trigos, se le extraviaron el día 1 del actual, dos caballerías de las siguientes señas.

Un macho pelo rojo, recién esquilado, cuatro años, menos de la cuerda, tiene abierto el casco de la mano derecha.

Una mula color ceniza, ocho años, alzada menos de la cuerda, tiene las manos labradas como de haberla dado fuego.

Lo que se hace público en este periódico oficial, a fin de que por todas las autoridades dependientes de la mía, practiquen gestiones para averiguar su paradero, y caso de ser habidas lo comuniquen al señor Alcalde de Martín Muñoz de las Posadas.

Segovia, 3 de Septiembre de 1931.

EL GOBERNADOR,

Hipólito González Parrado

2766

Según participa a este Gobierno civil, el Sr. Comandante del puesto de la Guardia civil de Labajos, el día 31 del pasado Agosto se le extraviaron al vecino de Muñopedro José Meléndez Núñez, dos caballerías de las siguientes señas:

Macho cerrado, cinco a seis cuartas de alzada, castaño, herrado de las cuatro patas, hierro en la nalga derecha.

Macho de ocho años, negro, herrado de las manos, lunar blanco en el lado derecho del cuello.

Lo que se hace público en este periódico oficial, a fin de que se proceda a su busca por las autoridades dependientes de la mía, y caso de ser habidas, se ponga en conocimiento del Sr. Alcalde de Muñopedro.

Segovia, 5 de Septiembre de 1931.

EL GOBERNADOR,

Hipólito González Parrado

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

ORDEN

Exmo. Sr.: Publicada, con fecha 28 del mes último, una Orden ratificando el contenido de la que en 1908 prohibió la celebración de capeas y mandando que no se permitiesen espectáculos taurinos nada más que en circos de fábrica contruidos permanentemente, imperativos de realidad han obligado a este Ministerio a aclarar la mencionada disposición en el sentido que a continuación se expresa.

1.º Podrán celebrarse corridas de toros o novillos en plazas provisionales, siempre que la lidia corra a cargo de toreros profesionales, entendiéndose que ostentan esa condición quienes hubiesen satisfecho en ejercicios anteriores contribución por utilidades o estuviesen inscritos con un mes de anticipación en una Asociación profesional de toreros legalmente constituida. La profesionalidad de los toreros se acreditará ante el Gobernador civil de la provincia mediante los oportunos certificados, sin los cuales no podrá dicha Autoridad conceder el permiso para celebrar la corrida en plazas provisionales.

2.º Los Gobernadores civiles, antes de conceder un permiso para celebrar corridas en locales no permanentes ni de fábricas, enviarán técnicos, y en caso necesario delegados de su autoridad, que comprueben si la plaza reúne condiciones de seguridad, tanto para el público como para los lidiadores, y, si están debidamente atendidos los servicios de enfermería. En caso

negativo, prohibirá la celebración del espectáculo. Si los informes de los técnicos no se ajustasen a la realidad, el Gobernador les impondrá el máximo de multa que la ley autoriza, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pudieran incurrir.

3.º Los permisos concedidos antes de la Orden de 28 de Agosto se tendrán por nulos, y únicamente podrán convalidarse justificando ante el Gobernador la profesionalidad de los toreros, a tenor de lo dispuesto en el apartado primero de esta Orden y sometiendo a nueva investigación las condiciones de la plaza y de la enfermería. Este informe deberá llevarse a efecto por técnicos distintos de los que ya hubiesen informado.

4.º Si a pesar de todas esas garantías el Gobernador civil tuviese motivos o antecedentes bastantes para suponer que a pretexto de una corrida de toros se iba a verificar una capea, prohibirá el espectáculo.

5.º Los Gobernadores civiles darán las órdenes oportunas a los Alcaldes y a la Guardia civil para que impidan la permanencia fuera de las localidades destinadas al público y a la intervención en la lidia de todas aquellas personas ajenas a los toreros anunciados, procediendo a la detención de los contraventores de esta disposición, los cuales serán castigados con la multa que la autoridad crea conveniente. Si la invasión al terreno destinado a la lidia se realizase en masa, el Alcalde suspenderá el espectáculo y la fuerza pública despejará la plaza.

6.º La presente orden sólo tendrá vigencia hasta 31 de Diciembre del corriente año, a partir de cuya fecha la norma aplicable será estrictamente la contenida en la orden de 28 de Agosto próximo pasado.

Lo comunico a V. E. para su exacto cumplimiento. Madrid, 2 de Septiembre de 1931.—Miguel Maura.

Señores Director general de Seguridad, Gobernadores civiles de todas las provincias y Delegados gubernativos de Ceuta y Melilla.

(Gaceta del 3 de Septiembre).

2758

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ANUNCIO

La Comisión gestora en sesión celebrada el 28 del pasado mes de Agosto, en vista de la propuesta formulada por el Sr. Ingeniero Director de Vías y Obras provinciales, acordó:

Que con motivo de la próxima construcción por la Jefatura de Obras públicas de esta provincia de los trozos 3.º y 4.º de la carretera de Sepúlveda a Peñafiel, con rampas de acceso a los pueblos de Pecharromán, Fuentesoto y Valtiendas, la citada Comisión cree conveniente, por quedar así bien servidos todos los pueblos interesados y con una importante economía para todos:

1.º La supresión en el plan de caminos vecinales aprobado, de los siguientes, con el número que en el mismo figuran:

Número 31.—«De Fuentesoto a Torreadrada».

Número 38.—«De Valtiendas a la carretera de Aranda de Duero a Cantalejo».

Número 39.—«De Sacramenia a Fuentesoto por Pecharromán, anejo de Valtiendas».

Número 40.—«Del kilómetro 24 de la carretera de Aranda de Duero a

Cantalejo al kilómetro 20 de la de Sepúlveda a Peñafiel por Torreadrada».

Número 45.—«De Castro de Fuentesoto, sitio de «Los Corchos», a Fuentesoto, en sustitución de la carretera de Sepúlveda a Peñafiel».

Número 46.—«De Valtiendas a Sacramenia, en sustitución de la carretera de Sepúlveda a Peñafiel».

2.º Y su sustitución por los siguientes con el número en que figurarían; quedando por tanto subsistentes los ofrecimientos hechos por los pueblos en el primer concurso de subvenciones y anticipos para los trozos que han de construirse:

Número 31.—«De Fuentesoto a Fuentesoto».

Número 38.—«De Valtiendas a la carretera de Aranda de Duero a Cantalejo».

Número 40.—«Del kilómetro 24 de la carretera de Aranda de Duero a Cantalejo al kilómetro 20 de la de Sepúlveda a Peñafiel por Torreadrada».

Lo que se hace público para que durante quince días naturales, plazo de la información pública, los particulares y Corporaciones locales interesadas puedan alegar lo que estimen conveniente a su derecho.

Segovia, 1.º de Septiembre de 1931.—El Presidente, «Segundo de Andrés».—P. A. de la C. G., El Secretario, Timoteo de Antonio y Gil.

2736

CÉDULAS PERSONALES

Presentada por el Recaudador del impuesto de cédulas personales de la Capital y año de 1929, la cuenta de ejecutiva, la Comisión Gestora en sesión de 28 de Agosto último, acordó declarar incobrables y fallidas provisionalmente las cédulas que por valor de 2.459,50 pesetas, se presentan en descubierto, y otra suma igual por los recargos, y que en sustitución de los certificados de solvencia e insolvencia a que se refiere el artículo 198 del estatuto de Recaudación de Hacienda, se exponga el expediente al público en la Secretaría de la Corporación (Negociado del Impuesto) por un plazo de cinco días, a contar del siguiente al en que el presente anuncio aparezca inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con objeto de que los contribuyentes puedan examinarle y formular cuantas observaciones y reclamaciones se le ofrezcan.

Segovia, 2 de Septiembre de 1931.—El Presidente, Segundo de Andrés.—P. A. de la C. G.: El Secretario, Timoteo de Antonio y Gil.

Administración de Rentas Públicas de la Provincia

Patente nacional de circulación de automóviles

CIRCULAR

Creada la patente nacional de automóviles por Real decreto de 29 de Abril de 1927 y publicado el reglamento para su administración y cobranza de 28 de Junio en la Gaceta de 2 de Julio del mismo año, inspirándose ambas disposiciones en el propósito del Gobierno de unificar y simplificar los impuestos en general, y especialmente los que gravaban a los vehículos de tracción mecánica; esta Administración de Rentas Públicas, en obediencia a tales preceptos

y para facilitar a los Ayuntamientos de la provincia su cumplimiento, ha acordado las siguientes instrucciones:

En cumplimiento a lo que dispone el artículo treinta y seis del citado reglamento de 28 de Junio dicho, para administración y cobranza de la patente nacional de circulación de automóviles y la disposición 8.^a de la circular de la Dirección general de Rentas Públicas de 18 de Julio de 1927, en el actual mes de Septiembre, se formará por los Ayuntamientos de la provincia donde existieran automóviles, un padrón para cada una de las clases A, B, C y D, o sea para automóviles de lujo, para automóviles de alquiler, para camiones de mercancías y para motocicletas con o sin sidecar.

La formación de tal padrón se hará numerando correlativamente los asientos, pero dejando tres o cuatro líneas entre asiento y asiento, con objeto de poder hacer constar las variaciones que ocurran durante la vigencia del padrón; en cada asiento se consignarán los nombres y apellidos y domicilio del dueño del coche y las características de cada uno: número de matrícula, fuerza del motor y si fuera ómnibus de viajeros el número total de asientos.

Igualmente se consignarán las casillas necesarias para conocer las antedichas características y otra por el total importe del año 1932 por el que se hace el padrón.

En cada uno de éstos se hará constar por separado las tres secciones o clases siguientes: los vehículos sujetos a patentes, los exentos en virtud de baja provisional y los exentos totalmente, consignando las causas de dichas bajas.

Asimismo se tendrán presentes las bonificaciones señaladas en los apartados D, E y F del artículo 10 del repetido reglamento para administración y cobranza de la patente nacional de circulación de automóviles, de 28 de Junio de 1927.

En virtud de lo dispuesto por Real decreto del Ministerio de Hacienda de 22 de Julio de 1930, a partir del día 1.^o de Enero próximo, los autocamiones dedicados al transporte de mercancías tributarán a razón de 36 pesetas por caballo y año, con un mínimo de diez caballos.

Cuando se empleen tractores aislados, que únicamente pueden remolcar un solo vehículo mientras otros estén cargando o descargando, pagarán la cuota íntegra que les corresponda, según la potencia del motor, entendiéndose que constituirá un solo vehículo el motor con su primer remolque enganchado, y que los restantes remolques satisfarán, cada uno, el 25 por 100 de la cuota asignada al tractor.

No se tendrán en cuenta las fracciones de caballo en ninguno de los casos de este artículo.

Quedan suprimidas las bonificaciones que se concedían por transportes de «productos propios» y demás enumerados en el apartado segundo del artículo 5.^o antes citado.

Los camiones automóviles pertenecientes a agricultores tributarán igualmente a razón de 36 pesetas por caballo y año, sin el recargo del 25 por 100 que antes satisfacían.

El apartado C) del artículo 10 queda suprimido, y en su virtud no se concederán en lo sucesivo bonificaciones por el uso de llantas neumáticas ni semimacizas.

Continuarán disfrutando de la reducción del 50 por 100 que se concede en el apartado D) del artículo 10,

los contratistas de la correspondencia pública que utilicen vehículos dedicados única y exclusivamente al transporte de dicha correspondencia desde las Administraciones de Correos de las poblaciones a las Estaciones del Ferrocarril y viceversa, o también cuando el transporte tenga lugar entre poblaciones distintas, siempre que no realicen otra clase de servicios.

Por tanto, los señores Secretarios municipales que tengan a su cargo la formación de padrones de la clase C, camiones de mercancías, exigirán a los propietarios de estos vehículos los carnets o permisos de circulación, expedidos por el Gobierno civil respectivo, donde se consigna el número de caballos que han de servirles de base para practicar la liquidación, teniendo muy presente que el mínimo de caballos a liquidar ha de ser el de diez.

El padrón se hará por duplicado y con su lista cobratoria correspondiente, y una vez terminados estos documentos y autorizados por los señores Alcalde y Secretario, se expondrán al público durante los primeros quince días del mes de Octubre, admitiéndose las reclamaciones que contra el mismo se presenten, que deberán ser resueltas en la segunda quincena del citado mes de Octubre, remitiéndose a esta oficina el padrón por duplicado y su lista cobratoria, debidamente reintegrados con arreglo a la ley del Timbre, en los diez primeros días del mes de Noviembre.

La Administración de Rentas Públicas examinará los padrones y listas cobratorias, y devolverá al Ayuntamiento de que proceda un ejemplar con la nota aprobatoria, pasando la lista cobratoria y padrón a la Intervención de Hacienda para su censura, y después a la Tesorería-Contaduría para su contracción, la que entregará a los Recaudadores de Hacienda las respectivas listas cobratorias, para la expedición de las patentes.

Se recuerda a los Ayuntamientos la obligación de remitir a esta oficina inexcusablemente, salvo imposición de multas de 50 a 100 pesetas, los días 1.^o y 16 de cada mes, la relación de altas que por el impuesto de patente nacional se presenten. Tanto las altas como los asientos del padrón se liquidarán con arreglo a lo dispuesto por los artículos 3.^o, 4.^o y 5.^o modificado por el Real decreto de 22 de Junio último, 7.^o y 8.^o del reglamento de 28 de Junio de 1927 y tarifas publicadas por esta Administración en el BOLETÍN OFICIAL número 91 de 1.^o de Agosto de 1927.

Si en la aplicación del reglamento o de las instrucciones de esta circular surgiera alguna duda a los señores Alcaldes y Secretarios, podrán formular de oficio cuantas consultas estimaren conveniente, para el mejor despacho del servicio que se les encomienda.

Los Ayuntamientos que no tuvieran automóviles en su término, enviarán del 1 al 10 de Noviembre próximo certificación en que así lo hagan constar.

Esta Administración de Rentas Públicas espera del celo y acreditada competencia de los señores Alcaldes y Secretarios de la provincia el más exacto cumplimiento de cuanto se les interesa.

Segovia, 1.^o de Septiembre de 1931.—El Administrador de Rentas Públicas, P. V.: Pablo Carabias.

10 y 20 por 100 de aprovechamientos forestales

2760

En el BOLETÍN OFICIAL de 22 de Junio próximo pasado, aparece inserta una circular de esta Administración referente a las certificaciones del 10 por 100 de aprovechamientos forestales y 20 por 100 de la renta de propios de los montes a cargo de los Ayuntamientos, en la que se les daba un plazo hasta el 31 de Agosto para remitir a estas oficinas las certificaciones de los acuerdos tomados por aquellos Ayuntamientos para el aprovechamiento que anteriormente se indican; y siendo varias las Corporaciones municipales que no han cumplido en el plazo que se les señalaba el servicio de que se trata, he de prevenir a los Alcaldes y Presidentes de las Corporaciones que si para el día 20 del mes actual no han remitido a esta oficina las certificaciones de referencia, se procederá a exigir las responsabilidades en que incurran por su negligencia en el exacto cumplimiento de este servicio.

Segovia, 4 de Septiembre de 1931.—El Administrador de Rentas Públicas, P. V.: Pablo Carabias.

1763

Alcaldía de Ciruelos de Coca

SUBASTA

El día tres de Octubre próximo y hora de las diez de la mañana, tendrá lugar en esta Casa Consistorial el remate en pública subasta del fruto de piña albar del pinar de estos propios, número 103 del catálogo, bajo el tipo de tasación de ciento veinticinco pesetas y con sujeción a los pliegos de condiciones facultativas y económicas que obran de manifiesto en la Secretaría.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ciruelos de Coca, a 4 de Septiembre de 1931.—El Alcalde, Felipe Rodríguez.

2757

Alcaldía de Santiuste de San Juan Bautista

SUBASTA

El día dieciséis del actual, a las once horas del mismo, tendrá lugar en la Casa Consistorial y bajo la presidencia del que suscribe, con asistencia de un Concejal y del Secretario del Ayuntamiento, la subasta de las obras de reparación de la fuente pública titulada «Fuente del Fraile».

Servirá de tipo para la subasta la cantidad de mil ochocientas pesetas, no admitiéndose proposición mayor de esta cantidad.

La subasta se verificará por el sistema de pliegos cerrados, que serán extendidos con arreglo al modelo que a continuación se inserta y extendidos en papel de tres pesetas, sesenta céntimos, a los cuales se acompañará la cédula personal del interesado y el resguardo que acredite el depósito de noventa pesetas a que asciende el cinco por ciento del tipo de la subasta.

La presentación de pliegos tendrá lugar todos los días laborables, en la Secretaría del Ayuntamiento y hasta la media hora siguiente de abierta la subasta, y a su apertura se procederá en la segunda media hora.

En la subasta se observarán las

condiciones del pliego de su razón que se halla en la Secretaría del Ayuntamiento a disposición de quien interese.

Santiuste de San Juan Bautista, 2 de Septiembre de 1931.—El Alcalde, Ladislao Diez.

Modelo de proposición

Don..., vecino de..., con cédula personal de la tarifa..., clase..., número..., que acompaña, enterado de las condiciones que sirven de base a la subasta de las obras de reparación de la fuente pública titulada «Fuente del Fraile», de esta villa, se comprometo a ejecutar dichas obras por la cantidad de... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

2755

Alcaldía de Duratón

Terminado el repartimiento para la extinción de plagas del campo, correspondiente al actual año, queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de ocho días, contados desde que el presente vea la luz pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante cuyo plazo podrán producirse las reclamaciones que los interesados crean pertinentes.

Duratón, 1 de Septiembre de 1931.—El Alcalde, Luis Morales.

2744

Alcaldía de Ciruelos de Coca

Con esta fecha quedan expuestas al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término de quince días, las cuentas municipales correspondientes al ejercicio de 1930, con los documentos que las justifican, a fin de que puedan ser examinados, pudiendo formularse reparos y observaciones contra las mismas.

Ciruelos de Coca, a 1.^o de Septiembre de 1931.—El Alcalde, Felipe Rodríguez.

2743

Alcaldía de Villagonzalo de Coca

Con esta fecha quedan expuestas al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término de quince días, las cuentas municipales correspondientes a los ejercicios de 1929 y 1930, con los documentos que las justifican, a fin de que puedan ser examinadas, pudiendo formularse reparos y observaciones contra las mismas.

Villagonzalo de Coca, a 2 de Septiembre de 1931.—El Alcalde, Rodrigo Arroyo.

2746

Alcaldía de Laguna Rodrigo

El Ayuntamiento de este pueblo en sesión del día de ayer acordó por mayoría proceder a la práctica de un reconocimiento a base de deslinde y amojonamiento de todas las vías pecuarias y terrenos de carácter local, dando principio a los cuatro días de la inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia; que sirva de notificación a los dueños y administradores o poseedores de fincas contiguas a dichas vías y terrenos.

Laguna Rodrigo, 31 de Agosto de 1931.—El Alcalde, Leoncio Merinero.

2747

Alcaldía de Cabañas de Polendos

Por dimisión de quien las venía desempeñando se hallan vacantes las plazas de Depositario de los fondos

municipales y la de Recaudador de arbitrios, dotadas con el sueldo anual de setenta y cinco pesetas la primera, y con la retribución legal la segunda; se anuncian por el plazo de treinta días, contados desde la inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que durante dicho plazo, puedan solicitarse dichos cargos por las personas que deseen desempeñarlos.

Los agraciados con las plazas presentarán la fianza que se les exija por este Ayuntamiento.

Cabañas de Polendos, 1 de Septiembre de 1931.—El Alcalde, Tomás Gómez.

Alcaldía de Muñopedro

2754

Por el vecino de este pueblo José Meléndez Núñez, se da cuenta a esta Alcaldía de que en la tarde del día 31 del mes de Agosto último, han desaparecido del rastrojo de este término donde pastaban dos caballerías de su propiedad de las siguientes señas:

Un mulo, cerrado, negro, de seis cuartas, con un lunar en el lado derecho del cuello cerca de la paleta, herrado de las dos extremidades delanteras.

Una mula de igual alzada, pelo castaño, cerrada, con un hierro casi borrado en el anca derecha, herrada de las cuatro patas.

Lo que se hace público a fin de que si alguna autoridad tuviera conocimiento del paradero de dichos semovientes lo comunique a esta Alcaldía para que por su dueño puedan ser recogidos.

Muñopedro, 3 de Septiembre de 1931.—El Alcalde, José Patiño.

Alcaldía de Monterrubio

2744

Don Luis Moreno María, Alcalde constitucional de Monterrubio.

Hago saber: Que para atender al pago de las obras de reparación de la Casa Consistorial y Secretaría, la Comisión municipal de hacienda de este Ayuntamiento ha propuesto que, dentro del presupuesto municipal ordinario del mismo, para el corriente ejercicio económico, se verifique la transferencia siguiente:

Del capítulo 17, artículo 1.º, concepto 3.º, 113,88 pesetas; al capítulo 11, artículo 1.º, concepto 1.º, 113,88 pesetas.

Y en cumplimiento del artículo 12 del reglamento de la hacienda municipal, fecha 23 de Agosto de 1924, queda expuesta al público esta propuesta en la Secretaría de este Ayuntamiento, para que contra aquella puedan formularse reclamaciones en el plazo de quince días, contados desde el en que se publique este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Monterrubio, 4 de Septiembre de 1931.—El Alcalde, Luis Moreno.

Tribunal provincial de lo Contencioso-Administrativo de Segovia

2761

Don Blas Senent Ferrer, Presidente de la Audiencia y como tal del Tribunal provincial de lo Contencioso-Administrativo de Segovia.

Hago saber: que en este Tribunal y por el Letrado don Rufino Cano de Rueda, en nombre y representación de D. León Martín Arranz, mayor de edad y vecino de Remondo, se ha iniciado recurso contencioso-administrativo al amparo de las disposiciones del estatuto municipal, contra el acuerdo del Ayuntamiento del mencionado pueblo de fecha diez de Junio último por el que se destituyó al

recurrente del cargo de Alguacil y Guarda del repetido Ayuntamiento.

Y para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, para conocimiento de los que puedan tener interés directo en el negocio y quieran coadyuvar en él a la administración, expido el presente que firmo en Segovia a cuatro de Septiembre de mil novecientos treinta y uno.—Blas Senent.—El Secretario, Tomás de Lucas.

Juzgado de primera instancia e instrucción de Segovia

2749

Don Vicente Ramón Redondo y Montero, Juez de primera instancia de esta ciudad de Segovia y su partido.

Por el presente hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo, seguidos en este Juzgado y Secretaría única del refrendante y de los que se hará mención, se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como sigue:

Encabezamiento.—Sentencia.—En la ciudad de Segovia, a veintitrés de Julio de mil novecientos treinta y uno; el Sr. D. Leandro Sancho Asenjo, Juez municipal de esta ciudad, en funciones del de primera instancia por la no posesión del electo, asistido del asesor el Letrado D. Gabino Herrero Llorente, habiendo visto los presentes autos de juicio ejecutivo, seguidos entre partes de la una y como demandante D. Cirino Llera Téllez, como representante legal de su hijo menor de edad, D. Gaspar Llera Llera y D.ª María Llera y Llera, mayores de edad y vecinos de esta ciudad, representados por el Procurador, D. Alejandro González Salamanca, y dirigidos por el Letrado D. Antonio Sanz, y de la otra y como demandado D. Ambrosio Tejedor Gallardo, también mayor de edad, casado y vecino de Santoyo, partido judicial de Astudillo, provincia de Palencia, en reclamación de once mil pesetas de principal, de mil novecientos sesenta y seis pesetas con sesenta y cuatro céntimos de intereses convenidos y liquidados hasta el quince del pasado Abril, los que se devenguen y costas, habiendo sido declarado en rebeldía dicho demandado por no haberse personado en el término legal, y

Parte dispositiva.—Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecución, y en su consecuencia mandar como mando seguir ésta adelante, haciendo trance y remate en bienes del ejecutado D. Ambrosio Tejedor Gallardo, vecino de Santoyo, y con su producto, entero y cumplido pago al ejecutante D. Cirino Llera Téllez, en representación de sus hijos menores, D.ª María y D. Gaspar Llera Llera, vecinos de esta ciudad, de la cantidad de once mil pesetas de principal, más los intereses del cinco por ciento anual de esta cantidad, a partir del día cinco de Abril de mil novecientos veintiséis, hasta el completo pago y costas, en todas las cuales condono al ejecutado.—Así por esta mi sentencia, que se notificará personalmente al litigante rebelde, si así lo solicitare la parte contraria o en otro caso en la forma prevenida por la ley, lo pronuncio mando y firmo, en unión del asesor Sr. Herrero Llorente.—Leandro Sancho.—Licenciado, Gabino Herrero Llorente.—Rubricados.

Y para que sirva de notificación en forma al ejecutado rebelde D. Ambrosio Tejedor Gallardo, vecino de Santoyo, partido judicial de Astudillo, provincia de Palencia, y para su

inserción en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, se extiende el presente en Segovia, a treinta y uno de Agosto de mil novecientos treinta y uno.—Vicente R. Redondo.—El Secretario Judicial, Licenciado Luis Gasque Pérez.

Juzgado de primera instancia e instrucción de Huelva

2756

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud a lo acordado por el señor Juez de instrucción de este partido, en providencia de esta fecha, dictada en cumplimiento a carta orden de esta Superioridad, dimanante del sumario núm. 596, 1930, por delito contra la honestidad, contra Juana Romero, se cita al testigo que se expresa a continuación, para que el día 20 de Octubre próximo, a las diez y media en punto de su mañana, comparezca ante la Audiencia Provincial de esta Ciudad, con objeto de asistir al juicio oral por Jurados en indicada causa; apercibido que de no comparecer, le parará el perjuicio que haya lugar, con arreglo a las prescripciones legales.

Individuo que se cita

Testigo: Andrés Yuste Muñoz, vecino de Yanguas (Segovia), calle mayor, núm. 7.

Huelva, 2 de Septiembre de 1931. El Secretario.

Juzgado municipal de Bercimuel

2753

Por providencia del Sr. D. Julián Sanz Calvo, Juez municipal de Bercimuel, dictada con fecha 31 de Agosto, en los autos de juicio verbal, a instancia de D. Alejandro García Holgueras, contra D. José Sanz Cuenca, sobre pago de mil pesetas, se sacan a pública subasta por término de veinte días los bienes siguientes:

1.º Una tierra en término de Bercimuel al sitio de «Las Altas», de ocho áreas y sesenta y tres centiáreas; que linda al Norte, propios del pueblo; Este, de Julián Sanz; Sur, de Mariano Provencio, Occidente, propios del pueblo; tasada en 25 pesetas.

2.º Otra tierra en los Roturos, de tres áreas y veintidós centiáreas; que linda al Norte, de María Albertos; Este, de Angel Nuño; Sur, el arroyo de Campillo, y Occidente, de Cirilo Moreno; tasada en 50 pesetas.

3.º Una era en Barrio chico; de una área y treinta y siete centiáreas, hoy tiene doble calidad; que linda al Norte, de Doroteo Moreno; Este, propios del pueblo; Sur, de María Sanz Martín, y Occidente, la carfetera; tasada en 100 pesetas; y

4.º Una casa en este pueblo de Bercimuel, calle de la Iglesia, número 3, de planta baja, principal y desván, con un pequeño corral delante; que linda por el Norte, callejón de gotereo de esta casa y de la de Castor Martín; Este, calle pública; Sur o frente, casa de Felipe Sanz Nuño, y Occidente, casa y corral de María Sanz Martín; tasada en 2.000 pesetas.

Cuyos bienes han sido embargados como de la propiedad del deudor don José Sanz Cuenca, y se venden para pagar a D. Alejandro García Holgueras la cantidad indicada y las costas; debiendo celebrarse el remate el día veintiséis de Septiembre a las nueve horas en los estrados de este Juzgado, haciendo constar que no existen títulos inscriptos de los mismos.

Lo que se hace saber al público para su conocimiento; advirtiéndole que no se admitirá postura que no cubra las dos terceras partes de la tasación,

y sin que antes se haya consignado el 10 por 100 de la tasación.

Dado en Bercimuel a 31 de Agosto de 1931.—El Juez municipal, Julián Sanz.—El Secretario, Mariano Provencio.

Comité Paritario de Harinera y Molinería de Madrid

ANUNCIO

El Pleno del Comité Paritario Interlocal de Harinera y Molinería de Madrid, con jurisdicción en las provincias de Madrid, Cuenca, Guadalajara, Avila y Segovia, acordó, en la sesión celebrada el día 29 del pasado mes de Julio, implantar el descanso dominical en todas las fábricas y molinos harineros y de piensos enclavados en territorio de su jurisdicción.

Lo que se hace público conforme a lo prevenido en el artículo 49 del decreto-ley de Organización Corporativa Nacional de 26 de Noviembre de 1926, texto refundido; advirtiéndole que contra dicho acuerdo, cuyo texto puede ser examinado en las oficinas de este Comité, Rosalía de Castro, 27, los días laborables, de seis a nueve de la noche, puede interponerse recurso ante el Ministerio de Trabajo y Previsión, en el término de veinte días, a partir de la publicación del presente anuncio, debiéndose presentar el recurso en la Secretaría del Comité.

Madrid, 4 de Agosto de 1931.—El Secretario, Rafael García Sánchez.—V.º B.º El Presidente, Francisco Martínez del Monte.

PATRONATO LOCAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SEGOVIA

ANUNCIO

Acordada la provisión de la plaza de Vigilante de estudios de los alumnos de la Escuela Elemental del Trabajo de Segovia, se anuncia a concurso, con arreglo a las bases siguientes:

1.º La plaza de Vigilante de estudios será provista por el Patronato.

2.º La remuneración anual será de 500 pesetas que percibirá con cargo a los fondos del Patronato local de Formación Profesional de Segovia.

3.º El cargo de Vigilante de estudios, consistirá como su título indica en sostener el orden y atención de los alumnos en las clases de estudios, así como exponer los métodos pedagógicos conducentes al mayor rendimiento.

4.º La labor del vigilante de estudios será desarrollada en la Escuela Elemental del Trabajo de Segovia, durante tres horas diarias.

5.º Para tomar parte en este concurso los aspirantes deberán presentar sus instancias dirigidas al Sr. Presidente del Patronato en la Secretaría del mismo (Escuela Elemental del Trabajo, plaza del Salvador, número 1), en el improrrogable plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia.

6.º A más de la instancia acompañarán los documentos siguientes:

Copia certificada de la partida de nacimiento, certificación negativa del Registro Central de penados y rebeldes y certificación acreditativa de aptitud física para desempeñar el cargo.

Segovia, 3 de Septiembre de 1931.—El Presidente del Patronato, Segundo de Andrés.

IMPRENTA PROVINCIAL

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION

DECRETO

Como Presidente del Gobierno de la República, de acuerdo con éste y a propuesta del Ministro de Trabajo y Previsión,

Vengo en aprobar el siguiente reglamento para la aplicación a la agricultura de la ley de accidentes del trabajo.

Dado en Madrid, a veinticinco de Agosto de mil novecientos treinta y uno.—Niceto Alcalá Zamora y Torres.—El Ministro de Trabajo y Previsión, Francisco L. Caballero.

REGLAMENTO

para la aplicación a la Agricultura de la ley de accidentes del trabajo.

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales en materia de accidentes del trabajo en la agricultura y de la responsabilidad en materia de accidentes.

SECCIÓN PRIMERA

Definiciones

Artículo 1.º Para los efectos de este reglamento se entiende por accidente toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

Artículo 2.º Se considerará patrono:

1.º La persona natural o jurídica por cuya cuenta se realicen los trabajos agrícolas o forestales, en concepto de propietario, aparcerero, arrendatario, subarrendatario, usufructuario, enfiteuta, forero, etc.

2.º La que explote o tenga a su cargo la ejecución de dichos trabajos en virtud de contrato, con cualesquiera de las personas a que se refiere el número anterior.

Artículo 3.º Cuando ejecute por su cuenta los trabajos agrícolas o forestales, el conceptuado patrono, según el número 1 del artículo 2.º, será responsable directamente de los accidentes que ocurran a sus obreros, bien los hubiera contratado por sí o por medio de mandatarios.

El responsable subsidiario tendrá derecho a repetir contra el directo por el importe de la indemnización abonada y gastos satisfechos.

Artículo 4.º En caso de aparcería, el propietario vendrá obligado a reintegrar al aparcerero la parte de indemnización proporcional a su participación en el contrato.

Artículo 5.º Se reputarán obreros a los efectos de este reglamento:

1.º Los que ejecuten habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio por cuenta ajena.

2.º Los criados que no estén dedicados exclusivamente al servicio del personal del patrono o de su familia.

Artículo 6.º No se conceptuarán obreros:

1.º Los individuos de la familia de cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 2.º que les ayuden en los trabajos, siempre que vivan bajo el mismo techo y sean sostenidas por dichas personas, sin percibir remuneración en concepto de obreros.

Se entenderá por individuos de la familia los que sean:

a) En línea recta sin limitación de grados.

b) En la colateral hasta el segundo grado civil.

Gozarán de la misma consideración legal los prohibidos y los acogidos por el patrono, siempre que estén éstos últimos sostenidos por él lo menos con un año de artelación a la fecha del accidente y no tengan otro amparo.

2.º Los que cooperen ocasionalmente a los trabajos con el carácter de servicios de buena vecindad.

SECCIÓN SEGUNDA

Responsabilidad

Artículo 7.º La víctima del accidente del trabajo tendrá derecho:

1.º A la asistencia médica y farmacéutica.

2.º A la indemnización correspondiente a la clase de incapacidad. En caso de fallecimiento, la indemnización corresponderá a sus derechohabientes, en la forma que se indica en este reglamento, y deberá el patrono abonar los gastos de sepelio en la cuantía señalada por el artículo 77.

Artículo 8.º Darán lugar a responsabilidad, con arreglo a este reglamento:

1.º Los trabajos agrícolas o forestales, o sea los relativos al cultivo de la tierra en todas sus especies, y del aprovechamiento de los bosques, hágase o no uso en dichos trabajos de máquinas movidas por fuerza distinta de la muscular.

2.º La cría, explotación y cuidado de los animales.

3.º Los trabajos relativos a la explotación de la caza y los de la pesca fluvial.

4.º Los trabajos auxiliares o que sirvan de medio para los agrícolas o forestales, como construcción de zanjas, acequias, saneamiento de terrenos, riegos, etc., a menos que por su importancia o por el carácter de los obreros estén comprendidos en la legislación general de accidentes.

5.º La elaboración, transformación, transporte y venta de productos agrícolas, forestales y zoógenos, siempre que no constituyan industria separada o que no sea aplicable la legislación general de accidentes.

6.º La guardería para todos los trabajos comprendidos en los números anteriores.

Artículo 9.º La responsabilidad que establece el presente reglamento es la referente a los accidentes ocurridos a los obreros con ocasión o por consecuencia del trabajo que realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo en que el mismo se produzca.

No se considerarán, sin embargo, debido a fuerza mayor extraña del trabajo, a los efectos de la ley, los accidentes que reconozcan por causa el rayo, la insolación u otros fenómenos análogos de la naturaleza.

Artículo 10.º La imprudencia profesional, o sea la que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo, no exime de la responsabilidad al patrono.

Artículo 11.º Si ocurrido un accidente, el patrono entendiera que fué debido a fuerza mayor o causa fortuita extraña al trabajo; lo manifestará así a la Autoridad gubernativa, al dar el parte del accidente, obligación de la que no quedará relevado por aquella apreciación, ni tampoco de la de prestar al accidentado la asistencia médica y farmacéutica inmediata, debiendo además hacer constar en tal caso la conformidad o disconformidad del obrero.

SECCIÓN TERCERA

Disposiciones generales.

Artículo 12.º Las obligaciones de asistencia médico-farmacéutica al obrero víctima del accidente del trabajo se hará efectiva, por regla general, mediante los servicios de las Mutualidades a que respectivamente deberá pertenecer cada patrono.

No habrá excepciones a esta regla más que las consignadas en el artículo 84.

La obligación de indemnizar en la cuantía prevista por las disposiciones legales, se hará efectiva mediante el seguro organizado por las Mutualidades, si con ellas contrata el riesgo de tal obligación el patrono o el seguro con Compañía particular.

Artículo 13.º Tanto la asistencia médica y farmacéutica como las indemnizaciones, serán obligatorias, aunque las consecuencias del accidente resulten modificadas en su naturaleza, duración y gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo, o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que la Mutualidad coloque al paciente para su curación.

Artículo 14.º Los patronos darán, en término de veinticuatro horas, a las Mutualidades, y éstas a las Autoridades o a los funcionarios de la Inspección del Trabajo, los partes o informaciones reglamentarias de los accidentes ocurridos en sus explotaciones, y si faltasen a esta obligación o no la cumplieren dentro de los plazos marcados, serán castigados con las sanciones que determina este reglamento.

Artículo 15.º El obrero, por su parte, o sus derechohabientes en caso de accidente grave, deben dar parte del accidente al patrono. De lo contrario, éste quedará exento de la multa de que habla el artículo anterior.

Artículo 16.º Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al accidente, la Mutualidad dará conocimiento al Alcalde, y en las capitales de provincia al Gobernador, por medio de un parte escrito firmado por quien la represente, en papel común y remitido por correo certificado.

También facilitarán a los Inspectores del Trabajo cuantos datos e informaciones les pidan, relacionados con los accidentes ocurridos.

Artículo 17.º En el parte que la Mutualidad dé a la Autoridad gubernativa, se hará constar:

1.º Hora y sitio en que ocurrió el accidente.

2.º Cómo se produjo.

3.º Quienes lo presenciaron.

4.º Nombre de la víctima.

5.º Lugar a que ésta fuera trasladada.

6.º Nombre y domicilio de los facultativos que practicaron la primera cura.

7.º Salario que ganaba el obrero; y

8.º Razón social de la Compañía aseguradora, cuando exista contrato de seguro.

En caso de defunción inmediata, se harán constar en el parte los datos que sean pertinentes.

Artículo 18.º Todos los documentos que la Mutualidad deba dirigir a la Autoridad gubernativa se presentarán por duplicado, uno de los cuales les será devuelto con la firma del funcionario que lo recoja.

Artículo 19.º Además es obligación de las Mutualidades dar conocimiento escrito a la Autoridad gubernativa desde que haya empezado a ha-

cerse efectiva la obligación por la responsabilidad del accidente.

En el escrito deben hacer constar su conformidad o disconformidad el obrero o las partes interesadas, por sí o por personas que los representen.

Caso de indemnización, el patrono o la Mutualidad, según sea quien lo haga efectiva, dará también conocimiento a la Autoridad gubernativa de haberla abonado, expresando la cuantía y el artículo, número y párrafo del precepto legal en que está comprendida.

Artículo 20.º El obrero tendrá derecho a hacer constar las deficiencias del cumplimiento de las disposiciones fundamentales que, a su juicio, existan, ante la Autoridad gubernativa que estime conveniente.

Artículo 21.º Las obligaciones de los facultativos respecto a certificaciones y los derechos del obrero cuando no se considere curado o no estuviese conforme con la certificación de la inutilidad, así como lo relativo a reclamaciones, estarán sujetos en un todo a las disposiciones fundamentales y reglamentarias actualmente en vigor sobre accidentes del trabajo.

Artículo 22.º Los operarios extranjeros gozarán de los beneficios del presente reglamento, así como sus derechohabientes que residan en territorio español al ocurrir el accidente. Los derechohabientes que residan en el extranjero gozarán de dichos beneficios, en el caso de que la legislación de su país les otorgue en análogas condiciones a los súbditos españoles, o bien cuando así se haya estipulado en Tratados especiales.

CAPITULO II

Asistencia médica y farmacéutica

Artículo 23.º Toda víctima de un accidente del trabajo tendrá derecho a la asistencia médica y farmacéutica en la forma que determinan los siguientes artículos.

Artículo 24.º Las Mutualidades constituidas con arreglo a la ley facilitarán la asistencia médico-farmacéutica al obrero hasta que éste se halle en condiciones de volver al trabajo.

Artículo 25.º También cesará la obligación de la Mutualidad, respecto a la asistencia médico-farmacéutica, cuando a virtud de dictamen facultativo, el obrero lesionado quede comprendido en el caso de incapacidad permanente, parcial o total, y no requiera ya la referida asistencia.

Artículo 26.º La asistencia médica y farmacéutica le será proporcionada al obrero lesionado sin demora alguna. Se acudirá de momento en demanda de los auxilios sanitarios más próximos, y la Mutualidad a que pertenezca el patrono facilitará el facultativo que haya de dirigir esta asistencia durante la curación.

Artículo 27.º Si para la dirección de la asistencia médica y certificación de los hechos, la Mutualidad designara facultativos distintos de los que normalmente tengan encargados del servicio comunicará a la autoridad gubernativa el nombre de los designados y las señas de su domicilio, en un plazo que no podrá exceder de cuarenta y ocho horas. De no hacerse esta designación ni acudir los que normalmente hagan el servicio, se entenderá que los facultativos que asisten al lesionado tienen implícitamente la representación de la Mutualidad.

Artículo 28.º El mismo día o el siguiente en que se declare la incapacidad de un obrero, el Médico que la califique y dé por terminada su asis-

tencia, extenderá el dictamen facultativo y entregará un duplicado del mismo al lesionado.

Artículo 29. La falta del certificado a que se refiere el artículo anterior, establece a favor del obrero la presunción de que ha necesitado asistencia facultativa hasta que otro Médico califique su incapacidad.

Artículo 30. El derecho de la víctima de un accidente a la asistencia farmacéutica comprende:

- a) El material que se considere necesario, facultativamente.
- b) Las medicinas que mediante receta prescriba el Médico.
- c) Los análisis necesarios.

Artículo 31. También puede el obrero lesionado o su familia proveer de medicamentos en la farmacia que estime conveniente, si en la localidad existiera más de una, y siempre que las recetas vayan firmadas o visadas por el Médico de la Mutualidad.

En tal caso, ésta no vendrá obligada a pagar sino con arreglo a la tarifa de la Beneficencia municipal, o si en la localidad no la hubiere, a la vigente en Madrid, hasta que se fije una general por Decreto.

Artículo 32. Para facilitar la asistencia facultativa de que se viene haciendo mención en estos artículos, las Mutualidades podrán contraer los servicios médicos y farmacéuticos en las condiciones expresadas en este reglamento.

Artículo 33. Están, ante todo, las Mutualidades facultadas para contratar la asistencia con Médicos y Farmacéuticos libres.

En tal caso, la retribución y demás condiciones de la prestación del servicio estarán sujetas a lo especificado en el contrato.

Artículo 34. Si no hicieran uso de esta facultad o no hubiera posibilidad de ejercitarla, podrán las Mutualidades acudir a los facultativos titulares de la respectiva circunscripción, y tanto los Médicos como los Farmacéuticos titulares estarán obligados a prestar la asistencia.

A este efecto, las Mutualidades habrán de concertarse con dichos facultativos sobre la base de una tarifa especial, aprobada con intervención de la superioridad sanitaria.

Artículo 35. En caso de no llegarse a un acuerdo entre las Mutualidades y los facultativos, respecto a la aplicación de la tarifa, cualquiera de las partes podrá someter el asunto al Gobernador civil, quien resolverá oyendo al Inspector provincial de Sanidad, y de cuyo acuerdo podrá apelarse ante el Ministerio de Trabajo y Previsión, el que resolverá oyendo a la Dirección de Sanidad y el Consejo de Trabajo.

Artículo 36. Otra forma de dar cumplimiento a esta obligación de las Mutualidades, será el acuerdo con los Ayuntamientos respectivos para recabar que la asistencia médica y farmacéutica se considere como un servicio de Beneficencia municipal.

Artículo 37. En el caso a que se refiere el artículo anterior, la asistencia médica y farmacéutica estará a cargo de los facultativos titulares, especialmente retribuidos para este servicio, por cuenta de la Mutualidad y de acuerdo con una tarifa especial incluida en el concierto que se celebre.

Artículo 38. Si en la localidad donde se produce el accidente existieran establecimientos especiales de asistencia (Hospitales municipales, etcétera), los Ayuntamientos, si hubieran contratado el servicio con las Mutualidades de patronos, facilitarán

tales medios de tratamiento mediante convenios adecuados.

Artículo 39. Si el lesionado ingresare en un Hospital, a los facultativos designados por la Mutualidad, o por el obrero, se les concederán las mismas atribuciones que a los Forenses.

Artículo 40. Cuando la índole del accidente lo exija o la imposibilidad de asistencia médico-farmacéutica en el domicilio de la víctima, obligue, a juicio de la dirección facultativa de la Mutualidad, a su ingreso y permanencia en Hospital o establecimiento análogo, las estancias que se causen serán de cargo de la Mutualidad.

En las estancias se comprenderá el importe de los alimentos, medicinas, honorarios de asistencia facultativa y demás gastos que se hubieran originado por la asistencia del obrero en sala de pago, según las tarifas generales del Establecimiento.

Artículo 41. En todas las localidades donde los facultativos de cualquier clase con quienes se haya contratado la asistencia sean varios, el obrero lesionado podrá elegir de entre ellos, en las condiciones que prevea el reglamento de la Mutualidad, a fin de que no se perturbe el servicio establecido por ésta.

Artículo 42. En los conciertos que las Mutualidades celebren con los facultativos, ya individuales, ya organizados, se expresará claramente:

- 1.º Clase y procedimiento de la asistencia si no está determinado en el reglamento.
- 2.º Las tarifas de remuneración con arreglo al número de servicios y a la densidad de la población.
- 3.º El procedimiento de remuneración al personal que preste estos servicios, sobre la base de que la obligación de pagarlos cae sobre las Mutualidades o sobre las entidades aseguradoras, en su caso.

Artículo 43. Cuando el Médico o el Farmacéutico presten al obrero determinado servicio que estuviesen obligados a prestarle, ya por que dicho obrero pertenezca a la Beneficencia municipal, ya por haberlo pagado según el sistema de «iguales», el interesado o el Médico lo declarará así a la Mutualidad, y en este caso, si ésta retribuyera a los facultativos por servicio y no a tanto alzado, la cantidad asignada por dicho servicio servirá para aumentar la indemnización.

Artículo 44. El obrero lesionado, o su familia, tienen, además, derecho a nombrar por su parte y a su cargo, con arreglo a la tarifa especial, uno o más Médicos que intervengan en la asistencia que le preste el facultativo designado por la Mutualidad.

Artículo 45. El Médico del obrero podrá, de acuerdo con el Médico del patrono, examinar al enfermo, enterarse de su tratamiento y formular las observaciones pertinentes para la más completa y acertada curación del accidentado. Caso de disconformidad, se acudirá a un Médico de la Beneficencia municipal, el cual dará inmediatamente dictamen por escrito, que servirá de prueba pericial en su caso ante el Tribunal Industrial o el Juez de primera instancia.

Si el pago de indemnización estuviese a cargo de una Compañía de Seguros, ésta podrá intervenir la asistencia facultativa del obrero lesionado en la misma forma que éste.

Artículo 46. El obrero que por su parte y a su cargo nombre Médico que intervenga en la asistencia, estará obligado a dar el nombre y la dirección del facultativo que le asista a la Autoridad gubernativa y a la Mu-

tualidad, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la designación.

También dará cuenta a la Mutualidad de los cambios de residencia.

CAPITULO III

De las incapacidades e indemnizaciones

SECCIÓN PRIMERA

Principios generales.

Artículo 47. Todo obrero víctima de un accidente tendrá derecho a una indemnización correspondiente a la clase de incapacidad sufrida.

Artículo 48. La indemnización se regirá en su forma y su cuantía por las disposiciones del presente reglamento, según las clases diversas de incapacidad.

Artículo 49. La cuantía de la indemnización se fijará de acuerdo con el modo como estuviere determinado el salario:

a) Si es por cantidad diaria, no se descontará más que el de los domingos, y caso siempre de que antes del accidente utilizara el obrero el descanso dominical sin percibir por los días de reposo salario alguno.

b) Si la retribución fuera tanto alzado mensual, la indemnización se fijará multiplicando por 24, por 18 o por 12, según las diversas cuantías de indemnización, la cantidad mensual que perciba el obrero.

c) Si se trata de un tanto alzado semanal se multiplicará el importe de una semana por 52, adicionando una sexta parte de la asignación semanal para fijar el total de la indemnización de un año.

Artículo 50. Para el cómputo de las obligaciones establecidas en este reglamento, se entenderá por salario, a efectos del pago de indemnizaciones, la remuneración o remuneraciones que efectivamente gane el obrero en dinero o en cualquier otra forma, por el trabajo que ejecute por cuenta del patrono a cuyo servicio esté cuando el accidente ocurra, ya sean aquellas en forma de salario fijo o a destajo, ya por horas extraordinarias o bien por primas de trabajo, manutención, habitación u otra remuneración de igual naturaleza.

En la aplicación de este precepto se observarán las siguientes reglas:

a) Las remuneraciones que, aparte del salario fijo o a destajo gane el obrero en cada caso sólo se computarán como salario cuando tengan carácter normal.

b) El salario diario, haya mediado o no estipulación, no se considerará nunca menor de dos pesetas, aun tratándose de mujeres o menores que no perciban remuneración alguna o que perciban menos de esa cantidad.

c) Para fijar el salario que el obrero no percibe en dinero, sea en especies, en uso de habitación o en otra forma cualquiera, se computará dicha remuneración, con arreglo a su promedio de valor en la localidad.

d) Si el servicio se contrató a destajo, debe regularse el salario apreciándose prudencialmente el que, por término medio, correspondería a los obreros de condiciones semejantes a las de la víctima del accidente en iguales trabajos, y en su defecto, en los más análogos posibles.

e) Las horas extraordinarias se considerarán remunerables conforme a lo que determinan las disposiciones vigentes.

f) Si se tratase de obreros accidentados en trabajos eventuales, a falta de pacto expreso respecto a la remun-

neración, servirá de base el salario señalado por los Jurados mixtos del Trabajo rural de la comarca, y si no se hallasen constituidos dichos organismos, servirá de base el salario medio del partido judicial a que pertenezca el pueblo en que ocurrió el accidente.

SECCIÓN SEGUNDA

Incapacidades.

Artículo 51. Para los efectos de las indemnizaciones por accidentes del trabajo se considerarán cuatro clases de incapacidades:

- a) Incapacidad temporal.
- b) Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.
- c) Incapacidad permanente y total para la profesión habitual.
- d) Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo.

Artículo 52. Se considerará incapacidad temporal, a tenor del artículo anterior, toda lesión que esté curada dentro del término de un año, quedando el obrero capacitado para el trabajo que estaba realizando al sufrir el accidente.

Artículo 53. Se considerará incapacidad permanente parcial para el trabajo habitual toda lesión que al ser dado de alta el obrero deje a éste con una inutilidad que disminuya la capacidad para el trabajo a que se dedicaba al ocurrirle el accidente, y en todo caso las siguientes:

- a) La pérdida funcional de un pie o de los elementos indispensables para la sustentación y progresión.
- b) La pérdida de la visión completa de un ojo.
- c) La pérdida de dedos o falanges indispensables para el trabajo.
- d) Las hernias de cualquier clase que sean.

Artículo 54. Se considerarán como incapacidades permanentes y totales para la profesión habitual, todas las lesiones que después de curadas dejen una inutilidad absoluta para todos los trabajos de la misma profesión, aunque el obrero accidentado pueda dedicarse a otra profesión u oficio, y especialmente las siguientes:

- a) La pérdida de las partes esenciales de la extremidad superior derecha, considerándose como tales, la mano, los dedos de la mano en su totalidad, aunque subsista el pulgar, o, en igual caso, la pérdida de todas las segundas y terceras falanges.
- b) La pérdida de la extremidad superior izquierda en su totalidad o en sus partes esenciales, conceptuándose como tales la mano y los dedos en su totalidad.
- c) La pérdida completa del pulgar de la mano que se utilice para el trabajo en cada caso particular.
- d) La pérdida de una de las extremidades inferiores en su totalidad.
- e) La pérdida de un ojo, con disminución de la visión del otro, en menos de un 50 por 100.
- f) La sordera absoluta.
- g) Todas las similares que produzcan la misma incapacidad.

Artículo 55. Se considerarán como incapacidades permanentes y absolutas para todo trabajo, aquellas que inhabiliten por completo al obrero para toda profesión u oficio, y especialmente las siguientes:

- a) La pérdida total o en sus partes principales de las dos extremidades superiores o inferiores, de una extremidad superior y otra inferior y de la extremidad superior derecha en su totalidad, conceptuándose como partes esenciales la mano y el pie.
- b) La pérdida de movimiento, aná-

loga a la mutilación de las extremidades, en las mismas condiciones indicadas en el apartado anterior.

c) La pérdida de los dos ojos, entendida como anulación del órgano o pérdida total de la fuerza visual.

d) La pérdida de un ojo, con disminución del más del 50 por 100 de la fuerza visual del otro.

La enajenación mental incurable.

f) Las lesiones orgánicas del cerebro, de los aparatos respiratorio y circulatorio, ocasionadas directa e inmediatamente por acción mecánica del accidente y que se reputen incurables.

g) Todas las lesiones similares a las descritas, que produzcan la misma incapacidad.

Artículo 56. La determinación de las lesiones definidoras de la incapacidad parcial, que formula el artículo 53, no obstará, sin embargo, para la apreciación de las mismas, con relación a la incapacidad profesional del lesionado, a que se refiere el artículo 54.

Artículo 57. Para la declaración de la incapacidad producida por una hernia, en caso de litigio, y de no resultar plenamente probado que se trata de una verdadera hernia de fuerza, o hernia por accidente, podrá solicitarse por cualquiera de las partes o acordarse por el Juez, la práctica de una información médica, conforme a lo que se dispone en el artículo presente.

Los obreros podrán instar, dentro del plazo de tres meses, a partir del momento que se sientan herniados, la información médica a que se refiere el presente artículo, y la instancia de ella interrumpirá la prescripción a que se refieren los artículos 136 y 137.

La información habrá de practicarse de oficio y a la mayor brevedad posible, bien por los Ayuntamientos de las localidades o bien por los Gobiernos civiles, a elección del obrero, cuando sea éste el que la reclame.

Al efecto de la información, se citará con todos los requisitos legales al patrono, y acreditada esta citación, no podrá interrumpirse el procedimiento por falta de comparecencia de aquél, si no que se continuará en su rebeldía con los documentos que presente el obrero que, a falta de otros contradictorios, surtirán plenos efectos legales.

Artículo 58. En la información a que se refiere el artículo anterior se hará constar.

1.º Los antecedentes personales del sujeto observado y los resultados de los exámenes anteriores que haya sufrido.

2.º Las circunstancias del accidente, referidas por el paciente y confirmadas por los testigos, si los hubo, puntualizando la naturaleza del trabajo a que se dedicaba el obrero; la posición exacta en que se encontraba en el momento del accidente; si estaba cargado al efectuar el esfuerzo al que se refiere la producción de la hernia, y la clase de ese esfuerzo.

3.º Los síntomas observados en el momento del accidente, y en los días sucesivos, comprobando muy especialmente si se produjo un dolor brusco en el momento del accidente, su localización y condiciones, si fué precisa la intervención inmediata de un Médico, y el tiempo que duró la suspensión de las faenas del herniado, caso de haber sido necesaria esta suspensión.

4.º Los caracteres de la hernia producida, los relacionados con el examen detenido del estado de integridad funcional de la región afectada y de la pared abdominal, y los deduci-

dos de los reconocimientos en fechas posteriores del lesionado.

Artículo 59. Los patronos o las Mutualidades podrán exigir de los obreros que vayan a ser admitidos al trabajo, el que se sometan a un reconocimiento médico previo, desde el punto de vista especial de la predisposición a padecer cualquier clase de hernia.

El resultado de ese reconocimiento se hará constar en un libro que se llevará al efecto, autorizando cada inscripción con su firma el Médico que practique el referido reconocimiento y el obrero reconocido, y ese libro deberá tenerse a la vista como documento de información en todos los casos de reclamación por ese concepto.

Cuando un obrero no haya sido sometido a dicho reconocimiento médico por dejación de la facultad que el patrono o la Mutualidad tienen para exigirlo, se presumirá *juris tantum* la sanidad del obrero.

Artículo 60. La negativa del obrero a someterse a reconocimiento, se consignará en el libro especial indicado en el artículo anterior, debiendo firmar dicha diligencia el obrero. Cuando éste se opusiera a ser reconocido, se hará constar en dicho libro esta oposición, firmando la diligencia, a petición del patrono o Mutualidad, dos testigos presenciales de la negativa.

Si el obrero reconocido no estuviera conforme con la opinión facultativa del Médico nombrado por el patrono, podrá nombrar otro por sí, para que lo reconozca nuevamente, ateniéndose a su resultado cuando coincidan los dos diagnósticos. En el caso de que éstos sean distintos, se estará sin otro recurso a lo que resulte del reconocimiento practicado por un tercer Médico, que se nombrará a instancia de una de las partes, por el Juez de primera instancia del término en que el reconocimiento se verifique.

A falta de reconocimiento médico del obrero, por negativa completa o cualquiera de las formalidades establecidas, dará lugar a la presunción *juris tantum* de que éste padecía con anterioridad una hernia o reunía condiciones orgánicas constituyentes de una predisposición a la misma.

Artículo 61. Todas las incapacidades son definidas, pero pueden coexistir con ellas otras de menos importancia, que se evaluarán con arreglo al siguiente cuadro, y harán cambiar la categoría de aquéllas, cuando sumen más de un 50 por 100, haciéndolas pasar a la superior inmediata, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51.

CUADRO DE VALORACIONES	Por ciento
1.º Pérdida de la segunda falange del pulgar derecho	25
Idem id. id. izquierdo ..	12
2.º Pérdida total del índice derecho	25
Idem id. id. izquierdo ..	18
3.º Pérdida de cualquier otro de los dedos	15
4.º Pérdida de una falange de cualquiera de los demás dedos de la mano, excepto el pulgar.	9
5.º Anquilosis de la muñeca derecha	45
Idem id. id. izquierda ..	30

Cuando ocurran tan solo lesiones de las mencionadas en el cuadro de valoraciones y no resultare plenamente probado que ellas no producen por sí solas, independientemente de aque-

llas valoraciones, una incapacidad profesional, serán conceptuadas como causantes de incapacidad parcial permanente para la profesión, si sumasen cincuenta o más por ciento las valoraciones correspondientes.

Artículo 62. A los efectos del artículo anterior, y cuando se trate de mujeres, cualquiera que sea su edad, y de obreros mayores de sesenta años, bastará que la suma de las valoraciones llegue al 40 por 100 para que la incapacidad pase a la categoría superior inmediata, o se califique de incapacidad parcial permanente para la profesión.

Artículo 63. La lesión conocida con el nombre vulgar de *callo recalentado* se considerará como incapacidad temporal para los efectos de la indemnización.

SECCIÓN TERCERA

De las indemnizaciones.

Artículo 64. En caso de incapacidad temporal se abonará al lesionado una cantidad igual a las tres cuartas partes de su jornal diario, desde el día en que tuvo lugar el accidente, hasta el en que se halle en condiciones de volver al trabajo, sin descontar los días festivos.

Si transcurrido un año no hubiera cesado aún la incapacidad, la indemnización se regirá por las disposiciones relativas a la incapacidad permanente.

Artículo 65. Si el accidente produce una incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo, el patrono abonará a la víctima una indemnización igual al salario de dos años.

Artículo 66. Si la incapacidad es permanente y total para la profesión habitual, pero no impide al obrero dedicarse a otro género de trabajo; la indemnización será de diez y ocho meses.

Artículo 67. Si la incapacidad es permanente y parcial para la profesión o clase de trabajo a que se halle dedicada la víctima, el patrono satisfará a ésta una indemnización equivalente a un año de salario.

Artículo 68. Toda indemnización se aumentará en una mitad más si el accidente ocurre en explotación cuyas máquinas y artefactos carezcan de los aparatos de precaución reglamentarios.

Artículo 69. En el caso de una incapacidad temporal producida por un accidente ocurrido durante trabajos de corta duración, retribuidos con remuneración extraordinaria, como la siega, la monda, etc., ya sea mayor que la ordinaria o menor que ella, se abonará al obrero lesionado la indemnización durante un mes, a partir de la fecha del accidente, conforme a la remuneración que ganaba al sufrir éste y pasado dicho mes se le abonará con arreglo al jornal medio de la comarca de que se trate.

Artículo 70. Si el accidente produce el fallecimiento de la víctima, la indemnización corresponderá a sus derechohabientes y el patrono abonará los gastos de sepelio, todo en la forma y cuantía señalada en las disposiciones de este reglamento.

Artículo 71. A los efectos del artículo anterior se consideran con derecho a percibir la indemnización: la viuda, los descendientes legítimos o naturales reconocidos menores de diez y ocho años o inútiles para el trabajo y los ascendientes en su caso, según las reglas siguientes:

a) Si la víctima deja viuda e hijos o nietos huérfanos que se hallasen a su cuidado, así como si deja sólo hijos o nietos la indemnización será

de un año de salarios igual al salario de los dos años que aquélla disfrutaba.

b) Si deja viuda sin hijos ni descendientes del difunto, o con hijos mayores de diez y ocho años, la indemnización será de un año de salarios.

c) Si no deja viuda ni descendientes, pero sí padres o abuelos pobres sexagenarios incapacitados para el trabajo, la indemnización será de diez meses de salario si fuesen dos o más los ascendientes que la víctima hubiese dejado, o de siete si fuese uno solo el ascendiente.

Artículo 72. El viudo de una obrera fallecida por accidente de trabajo tendrá derecho a la indemnización correspondiente, siempre que dependiera de la víctima, su subsistencia.

Los hijos o nietos de la obrera fallecida tienen el mismo derecho que si la víctima hubiera sido varón, siempre que sean huérfanos de padre.

Artículo 73. Igual beneficio que a los hijos legítimos se concede a los adoptivos y a los prohuérfanos por la víctima, a condición de que estuviesen sostenidos por ella un año antes del accidente y no tengan otro amparo.

A tal efecto se abrirá un registro especial en cada Registro civil donde consten los nombres de los acogidos, los de las personas que los acogen y la fecha del acogimiento.

Artículo 74. Si el obrero fallecido deja además hijos de otro matrimonio anterior se observarán las siguientes reglas:

a) Corresponderá a la viuda la mitad de la indemnización y la otra mitad se distribuirá por igual entre los hijos de los matrimonios.

b) La viuda percibirá la parte de los hijos que están bajo su potestad, y las de los hijos de los varios matrimonios se entregará a quien los tenga a su cargo, sea la viuda misma o sea otra persona.

Artículo 75. Unas indemnizaciones no excluyen otras. Por tanto, las debidas por incapacidad permanente, son independientes de las determinadas para los casos de incapacidad temporal, y las indemnizaciones por causa de fallecimiento no excluyen las que corresponderían a la víctima durante el tiempo transcurrido desde el accidente a la muerte.

Artículo 76. El patrono podrá otorgar, en vez de las indemnizaciones establecidas para caso de fallecimiento, pensiones vitalicias, siempre que las garantice a satisfacción de los derechohabientes de las mismas víctimas, en la forma y cuantía siguientes:

1.º De una suma igual al 40 por 100 del salario anual de la víctima, pagadera a la viuda, hijos o nietos menores de diez y ocho años.

2.º Del 20 por 100, a la viuda sin hijos ni descendientes legítimos o naturales reconocidos, de la víctima.

3.º Del 10 por 100, para cada uno de los ascendientes pobres, sexagenarios o incapacitados para el trabajo, cuando la víctima no dejase viuda ni descendientes, siempre que el total de las pensiones no exceda del 30 por 100 del salario.

Estas pensiones cesarán cuando la viuda pase a posteriores nupcias, y respecto de los hijos o nietos, cuando llegaren a la edad señalada en el artículo 71.

Artículo 77. La segunda obligación contraída con la víctima de un accidente, en caso de fallecimiento, es la de abonar los gastos de sepelio y para cumplirla se atenderá a las reglas siguientes:

- a) En poblaciones que no excedan de 20.000 habitantes, 100 pesetas.
- b) En las poblaciones de 20.000 a 100.000 habitantes, 150 pesetas.
- c) En las poblaciones mayores de 110.000 habitantes, 200 pesetas.

Artículo 78. El importe de las indemnizaciones a que tengan derecho los obreros víctimas de accidentes del trabajo o sus derechohabientes, no podrá, en ningún caso, ser objeto de cesión, embargo o retención.

Artículo 79. Cuando el accidente produjese el fallecimiento de la víctima y no existiera derecho-habiente alguno a las indemnizaciones determinadas en los artículos 70 al 74, el patrono o la entidad subrogada vendrá obligado a ingresar en el Fondo de garantía a que se refiere el artículo 126 una cantidad equivalente al salario de seis meses, que la víctima viniese percibiendo.

CAPITULO IV

Del seguro.

SECCIÓN PRIMERA

Disposición general.

Artículo 80. Los reputados patronos, según el presente reglamento, deberán asegurar el cumplimiento de sus obligaciones relativas al pago de indemnización, bien adscribiéndose a una Mutualidad que tome a su cargo satisfacer a los obreros víctimas de accidentes del trabajo la correspondiente indemnización, bien contratando con una Compañía de Seguros, legalmente constituida, el pago de dichas indemnizaciones.

Artículo 81. El hecho de no estar asegurado el patrono, además de motivar la sanción correspondiente, le constituye en sujeto directamente responsable de todas las obligaciones impuestas por la ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 122.

SECCIÓN SEGUNDA

De las Mutualidades.

A los efectos de este reglamento, se considerarán Mutualidades patronales a las asociaciones de este carácter legalmente constituidas, cuyas operaciones se reduzcan a repartir entre los asociados el equivalente de los riesgos sufridos por una parte de ellos, sin que puedan estas Mutualidades dar lugar a beneficios de ninguna clase.

Artículo 83. Los patronos cumplirán la obligación de asistencia por el intermedio de Mutualidades locales, que se constituirán para un Municipio o un grupo de Municipios limítrofes, con un mínimo de cien patronos asociados en cada Mutualidad. Igualmente podrán cumplirla mediante una Federación de Mutualidades locales.

Las sociedades agrícolas locales, legalmente constituidas, podrán establecer dentro de sí, como sección autónoma o formar mediante acuerdo con otras sociedades agrícolas, una Mutualidad para el objeto indicado, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por las disposiciones vigentes, y que la caja y contabilidad se lleven con la debida separación de las correspondientes a los demás fines de las sociedades. En estas Mutualidades podrá admitirse el ingreso de patronos no asociados en las sociedades matrices y será obligatorio hacerlo así siempre que para el mismo término no haya otra Mutualidad a que puedan pertenecer.

Artículo 84. Se exceptúan de la obligación a que se refieren los artículos 12 y 83:

a) Las explotaciones que ocupen ordinariamente más de cien obreros, y tengan el servicio de asistencia montado por sí mismas o concertado con entidades autorizadas y en todo caso en condiciones de perfección y eficacia no inferiores al promedio de las Mutualidades.

b) Cualesquiera otras que el Ministerio de Trabajo declare exceptuables con carácter general, previo informe del Consejo de Trabajo, por asegurar en cualquier otra forma especial una mayor protección para el obrero.

La excepción habrá de ser, además, declarada en cada caso particular por el Ministerio de Trabajo. En la disposición correspondiente se fijarán las garantías proporcionalmente necesarias para asegurar el buen cumplimiento de la obligación de asistencia.

Artículo 85. Las excepciones a que se refiere el artículo anterior, podrán dejarse sin efecto en cualquier momento por el Ministerio de Trabajo, si resultare no estar asegurados el servicio de asistencia con el mínimo requerido de perfección y eficacia.

Artículo 86. En las Mutualidades podrán ser aseguradas con carácter voluntario las personas que no se conceptúan como obreros, según el artículo 6.º. Este seguro voluntario podrá hacerse por cuenta de los interesados, por la del patrono o por la de ambos a la vez.

También se admitirá que los patronos se aseguren a sí mismos, con igual carácter voluntario.

Para los seguros hechos al amparo del presente artículo, servirán de límite la mayor remuneración que alcancen en la localidad los obreros que realicen trabajos iguales o los más análogos a los de los interesados.

Artículo 87. En los estatutos de las Mutualidades se consignará:

- 1.º Denominación, objeto, territorio que abarque, domicilio y duración.
- 2.º Régimen de la Mutualidad sobre la base del reconocimiento de su personalidad jurídica y de su autonomía; derechos y deberes de los asociados; altas y bajas de los mismos, registro de asociados.
- 3.º Normas relativas al caso de modificación de los estatutos y al de fusión de la Mutualidad con otra u otras.
- 4.º Normas de funcionamiento interior y gobierno de la Mutualidad, señalando las facultades de las juntas y demás organismos directivos que pueda haber y forma de nombramiento y separación de los empleados retribuidos que sean necesarios.
- 5.º Relaciones de la Mutualidad con otra u otras Mutualidades. Requisitos para la fusión.
- 6.º Régimen económico y de administración de la Mutualidad, comprendiendo:

- a) Fijación de cuotas.
- b) Constitución del fondo de reserva.
- c) Normas de administración y máximo admisible para los gastos de esta clase.
- d) Normas para el servicio de contabilidad.

Artículo 88. Entre las obligaciones de los Asociados figurará necesariamente la de resarcir a la Mutualidad cuando el accidente fuere debido a imprudencia o descuido graves o reiterados del patrono, u omisión de precauciones reglamentarias.

Artículo 89. Será obligatorio también establecer la responsabilidad mancomunada de los socios respecto a las obligaciones de la Mutualidad, tanto con respecto a las indemnizaciones a los obreros o sus derechoha-

bientes, como al Fondo de garantía, si las abonase, y, en general, a las obligaciones que contractualmente o reglamentariamente la alcancen; responsabilidad que no terminará hasta la liquidación del periodo correspondiente de las operaciones sociales o la liquidación final en su caso.

Artículo 90. Los estatutos de las Mutualidades y lo mismo los reglamentos particulares, en su caso, deberán ser sometidos a la aprobación del Ministerio de Trabajo, previos los informes del Instituto Nacional de Previsión y del Consejo de Trabajo.

A tal efecto, acompañarán a la instancia los documentos siguientes:

- a) Acta de constitución inicial de la Mutualidad.
- b) Tres ejemplares de los estatutos y de los reglamentos que se sometan a su aprobación.
- c) Tres ejemplares de los cuadros de cuotas y modelos de la documentación para ingreso en la Mutualidad.
- d) Acta en que se obliguen los iniciadores a constituir la fianza inicial mínima.

Si merecieran la aprobación, se devolverá uno de los ejemplares, con la diligencia correspondiente y sellado en todas sus hojas. En caso contrario, se especificarán los reparos para que puedan ser salvados en una nueva redacción.

La aprobación o los reparos habrán de comunicarse dentro del plazo de dos meses salvo que lo impidiese la discusión en algunos de los centros informantes, lo cual se comunicará también dentro del mismo plazo a la entidad interesada o a sus organizadores.

A la misma autorización, mediante igual trámite, habrá de ser sometida toda modificación de los estatutos y reglamentos.

Artículo 91. Deberá ser denegada la aprobación a todo documento en que se mermen, por cualquier medio las indemnizaciones procedentes en casos de accidente o en que se estipulen condiciones por las que se dilate sin verdadera necesidad el pago de las cantidades debidas a quienes se otorgan.

Artículo 92. Las Mutualidades no podrán comenzar su gestión sin que sus estatutos hayan sido aprobados. El mismo requisito será indispensable para la implantación de nuevo reglamento o de las modificaciones de estatutos y reglamentos.

Artículo 93. Los patronos asociados serán obligados a comunicar a sus respectivas Mutualidades las altas y bajas de obreros, salarios y en general, todos los datos necesarios para el cumplimiento de sus fines y el buen funcionamiento de la Mutualidad.

En caso de que los patronos no pudieran por sí poner tales comunicaciones podrán hacerlas por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento correspondiente.

La negativa o resistencia a facilitar tales datos, y lo mismo la inexactitud deliberada y producida por descuido no disculpable, darán lugar a multa de cinco a 50 pesetas, la cual será impuesta por la Directiva de la misma Mutualidad, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que los mutualistas pudieran haber incurrido y de la indemnización de perjuicio si procediere.

En caso de reincidencia, dentro del término de un año, la cuantía de la multa podrá elevarse hasta cien pesetas.

El importe de las multas irá a engrosar el fondo especial de garantía a que hace referencia el artículo 126.

Contra la imposición de estas multas podrá recurrirse, en término de quince días, ante la Delegación provincial del Trabajo, que resolverá inapelablemente.

La sanción podrá reducirse a un simple apercibimiento en los casos menos graves, sobre todo en el periodo de establecimiento de las Mutualidades.

Artículo 94. Las Mutualidades tendrán capacidad jurídica para adquirir y poseer bienes y para celebrar todos los actos y contratos relacionados con los fines de su institución, y tendrán personalidad para comparecer ante toda clase de Tribunales, oficinas y dependencias.

Artículo 95. El capital de las Mutualidades deberá aplicarse estrictamente al objeto social.

Cuando una Mutualidad atienda a la vez a asegurar el cumplimiento del deber de asistencia y al cumplimiento del deber de indemnizar, se establecerá una completa separación entre los recursos destinados a uno y otro objeto.

Artículo 96. Las Mutualidades deberán constituir y reponer en su caso la fianza inicial que en cada caso se fije y que no bajará de 5.000 pesetas.

Artículo 97. Las Mutualidades deberán presentar en el primer trimestre de cada año una declaración de las operaciones hechas en el año anterior para determinar, en relación con ellas, el importe de las fianzas o del fondo social de las Mutualidades.

El importe a que hayan de ascender será fijado por el Ministerio de Trabajo, a propuesta del Instituto Nacional de Previsión.

Artículo 98. Las Mutualidades llevarán registros de los patronos que hayan convenido con ellas el pago de las indemnizaciones en caso de accidente de trabajo sobrevenido a sus obreros, consignando respecto a éstos últimos edad, remuneración, oficio y clase de labores a que preferentemente se dediquen. Los mismos datos se comunicarán por los patronos en cuanto a los obreros eventuales.

Se llevará también registro de los demás particulares que se estimen necesarios para el mejor cumplimiento de lo dispuesto reglamentariamente.

Artículo 99. Cuando el fondo de reserva de una Mutualidad iguale o supere al total importe de los siniestros satisfechos en el último quinquenio, se reducirán las cuotas de los asociados a lo necesario para reponer constantemente dicho fondo y cubrir los gastos generales de administración.

Artículo 100. Podrá concederse también la reducción de cuotas, cuando el fondo de reserva iguale, cuando menos, al total importe de las indemnizaciones satisfechas en el último trienio y se cuente para acrecentarlo con fondos procedentes de donativos, legados, cultivo o explotación de bienes del común o de otras clases y, en general, por virtud de cualquier ingreso lícito.

No se computarán, a estos efectos, las subvenciones que puedan percibirse del Estado o de las Corporaciones públicas.

Los reglamentos de las mutualidades determinarán lo procedente en caso de reducción de cuotas, respecto a la situación de los mutualistas, según la fecha de su ingreso en la Mutualidad, en relación a las cuotas a satisfacer.

Artículo 101. Las Mutualidades podrán nombrar Delegados para vigilar el cumplimiento de las disposicio-

nes y medidas por ellas adoptadas, dentro de su especial competencia.

Podrán requerir al efecto el auxilio de las autoridades de todas clases, y especialmente el de los Inspectores del Trabajo.

Artículo 102. Las Mutualidades podrán hacer efectivas las cuotas de los asociados morosos por vía de apremio.

Mientras no se dicten disposiciones especiales, se aplicará con la indispensable adaptación, el procedimiento de apremio de deudores a la Hacienda.

Artículo 103. Para el cobro de cuotas, las Mutualidades gozarán de preferencia respecto de cualquier otro acreedor sobre los bienes del deudor, salvo lo ya dispuesto en las leyes vigentes.

Artículo 104. Las Mutualidades están obligadas a remitir al Ministerio de Trabajo los Balances y Memoria anuales, e igualmente todos los datos que se les pidan para la publicación de la Estadística de accidentes o para el mejor régimen del seguro de accidentes.

Artículo 105. Las Mutualidades podrán reasegurar el riesgo para que fueron constituidas, en Compañías legalmente establecidas y fundar una Confederación de Mutualidades.

SECCIÓN TERCERA

Compañía de seguros

Artículo 106. Los patronos podrán contratar directamente con Compañías de Seguros, legalmente constituidas, el seguro de accidentes de sus obreros. Dichas compañías habrán de reunir las condiciones que determina el presente reglamento y ser de las autorizadas, para estos efectos, por el Ministerio de Trabajo.

Artículo 107. El riesgo de la indemnización especial que se deriva de no contar la explotación o labor agrícola con los aparatos de precaución exigidos no puede ser en materia de Seguros. Si se proba que alguna entidad aseguradora lo asumía, deberá ser apercibida, y caso de persistir en pactar dicha condición, se le retirará la autorización oficial que se le hubiera concedido a los efectos del presente reglamento.

Artículo 108. Las Sociedades de Seguros que directamente o por reaseguro tomen a su cargo las indemnizaciones previstas en el presente reglamento, constituirán una fianza especial, cuyo importe fijará el Ministerio de Trabajo, a propuesta de la Asesoría de Seguros. Dicha fianza estará en relación con el total de remuneraciones que hayan servido de base a los seguros del año precedente, sin que la fianza pueda ser inferior, a 200.000 pesetas cuando la Sociedad actúe en varias provincias y a 150.000 pesetas cuando actúe en una sola.

Artículo 109. Las fianzas que, con arreglo al presente reglamento han de prestar las entidades aseguradoras, podrán constituirse indistintamente en la Caja general de Depósitos, en el Banco de España, o en las sucursales respectivas, en metálico o valores públicos, a disposición del Ministro de Trabajo.

Las fianzas sólo podrán devolverse a la liquidación o disolución de las entidades aseguradoras cuando no exista ninguna responsabilidad pendiente que pueda afectarlas.

Artículo 110. La suma que el obrero ha de percibir de las Sociedades de Seguros en ningún caso podrá ser inferior a la que correspondería con arreglo a los artículos correspondientes.

Artículo 111. No obstante el seguro, el obrero y sus derechohabientes podrán ejercitar sus acciones directamente contra el patrono, si así les conviniera; pero cuando dirijan la demanda contra la Compañía, deberán dirigirla a la vez contra el patrono.

Artículo 112. Las indemnizaciones por fallecimiento a cargo de las Sociedades de Seguros, gozarán de la exención por reclamaciones de acreedores que reconoce el artículo 426 del Código de Comercio vigente.

Artículo 113. Las Sociedades de Seguros que tomen a su cargo el riesgo de accidentes de trabajo en la agricultura, deberán presentar en el primer trimestre de cada año, una declaración de los seguros hechos en el año anterior, para determinar el importe de las fianzas, que será fijado por el Ministerio de Trabajo a propuesta de la Asesoría de Seguros.

Artículo 114. Las Sociedades de Seguros que deseen la autorización para sustituir al patrono, además de las señaladas por la ley y reglamento de Seguros, deberán reunir especialmente las condiciones siguientes:

1.ª Separación de las operaciones de seguro de accidentes del trabajo de cualesquiera otras que realicen.

2.ª Las fianzas especiales determinadas en los artículos anteriores.

3.ª Aceptación de los preceptos legales vigentes en materia de accidentes del trabajo.

4.ª Comunicación al Ministerio de Trabajo de los estatutos, Balance y empleo del capital, condiciones de las pólizas, tarifas de primas cálculo de reservas, de seguro y venta vitalicia y estadística de contratos estipulados, sus novaciones y cumplimiento o terminación.

Artículo 115. Las Sociedades de Seguros no podrán funcionar sin ser aprobadas en su concepto genérico o sea respecto al seguro en general, por la Inspección general de Seguros, y sin ser insertas por su especialidad en el Registro de las autorizadas para sustituir al patrono en las obligaciones que le impone la ley, Registro que está a cargo de la Asesoría general de Seguros del Ministerio de Trabajo, creada por Real decreto de 27 de Agosto de 1900.

Artículo 116. El Asesor general de Seguros de accidentes del trabajo informará y auxiliará al Ministro de Trabajo en los servicios de registro, comprobación, reglamentación y publicidad relativos al seguro de accidentes del trabajo.

Las Sociedades de seguros seguirán abonando los derechos de registro con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto de 27 de Agosto de 1900. Estos derechos se señalarán anualmente por orden del Ministerio de Trabajo, que deberá publicarse en la Gaceta.

Artículo 117. Para ser inscritas en el Registro a que se refiere el artículo anterior, las entidades aludidas deberán solicitarlo del Ministerio de Trabajo, acompañando a la instancia la documentación siguiente:

a) Acta de constitución y dos ejemplares de los estatutos.

b) Dos ejemplares del reglamento.

c) Dos de las tarifas primas.

d) Dos modelos de pólizas colectivas de accidentes.

e) Testimonio notarial del resguardo que demuestre haber constituido la fianza determinada por este reglamento.

Artículo 118. En cuanto sea inscrita una Sociedad de seguros, la Asesoría de Seguros del Ministerio de Trabajo devolverá a quien la presente uno de los ejemplares de la

póliza presentada, con el sello de dicha dependencia. Toda alteración que se introduzca en las pólizas deberá ser sometida a la aprobación del Ministerio citado, previo informe de la Asesoría.

Artículo 119. No será aprobada ninguna póliza en que se mermen, por cualquier medio, las indemnizaciones procedentes, en caso de accidente, ni aquellas en que se estipulen condiciones por las que se dilate innecesariamente el pago de las cantidades debidas a quienes se otorgan.

Artículo 120. En las pólizas de seguros de accidentes del trabajo se consignará claramente:

a) Si queda sustituido el patrono en todas sus obligaciones, o bien se expresarán taxativamente aquellas en que la entidad aseguradora acepte su sustitución.

b) El procedimiento por el cual cada obrero, cuyo riesgo haya de cubrir la póliza, tendrá conocimiento del seguro contratado entre el patrono y la Compañía.

Artículo 121. Las Sociedades de seguro están obligadas a remitir al Ministerio de Trabajo los balances, las Memorias anuales e igualmente todos los datos que de la misma soliciten para la publicación de la estadística de accidentes o para el mejor régimen del seguro de accidentes.

SECCIÓN CUARTA

Inexistencia del seguro

Artículo 122. En caso de no estar asegurado el patrono, regirán las siguientes prescripciones:

1.ª Vendrá sujeto directamente a todas las obligaciones impuestas en este reglamento.

2.ª El obrero víctima del accidente tendrá acción directa contra el patrono.

3.ª La acción se dirigirá contra el que sea patrono, conforme a los términos del artículo 2.º de este reglamento, con las responsabilidades subsidiarias, en caso de contrata o aparcería que respectivamente se establece en los artículos 3.º y 4.º

4.ª En el caso de ser varias las personas por cuyas cuentas ejecutaren los trabajos agrícolas o forestales, cada una de ellas responderá solidariamente de las indemnizaciones; y

5.ª El obrero en todo caso gozará preferencia entre los acreedores del patrono, de cualquier clase que sea para el cobro de las indemnizaciones.

SECCIÓN QUINTA

Del Instituto Nacional de Previsión

Artículo 123. El Instituto Nacional de Previsión estudiará y redactará las bases para un proyecto de Ley complementario del Decreto sobre accidentes del trabajo en la agricultura, a fin de establecer un sistema de reaseguro de accidentes agrícolas, con intervención del Estado, de suerte que las Mutualidades que se constituyan con arreglo a este reglamento puedan realizar el reaseguro.

Artículo 124. Estarán a cargo, desde luego del Instituto Nacional de Previsión, las siguientes funciones:

1.ª Asesorar a las Mutualidades en todo lo relativo a la práctica de sus operaciones para sustituir al patrono en el pago de las indemnizaciones.

2.ª Informar al Ministerio de Trabajo acerca de la constitución y funcionamiento de las Mutualidades.

3.ª Promover la organización de dichas Mutualidades.

4.ª Asesorar gratuitamente respecto de las cuestiones de carácter mé-

co, jurídico y económico del seguro de accidentes, en sus varias modalidades, proponiendo la forma de gestión más oportuna.

5.ª Administrar el fondo especial de garantía, a que se refiere el artículo 126.

6.ª Realizar las funciones de árbitro y amigable componedor en los asuntos que se les sometan referentes a la esfera de su especial competencia

7.ª Ejercer la inspección que se le atribuye en este reglamento.

Artículo 125. El Instituto Nacional de Previsión estudiará el desarrollo de los servicios, a que se refiere el artículo anterior, y propondrá al Ministerio las cantidades que habrán de consignarse en los presupuestos para su implantación y funcionamiento.

Artículo 126. En el Instituto Nacional de Previsión se constituirá un fondo especial de garantía, destinado a efectuar el pago de las indemnizaciones por causa de incapacidad permanente, parcial o total o por muerte, en caso de que el obrero no haya podido hacerla efectiva por cualquier causa del patrono o de la entidad responsable, Mutualidad o compañía.

El fondo de garantía tendrá acción directa sobre los bienes del patrono o de las mencionadas entidades, incluso respecto de éstas sobre la fianza que hayan depositado, para reintegrarse del importe de las indemnizaciones abonadas y de los gastos que ocasionare el reintegro, así como para el cobro de la cantidad que pudiera corresponderle en el caso previsto en el artículo 79, gozando, a tales efectos, de la calidad de acreedor, singularmente privilegiado.

Gozará asimismo el fondo de garantía del beneficio legal de pobreza y de todos los que establece la ley, así como de las preferencias en ella concedidas.

Artículo 127. El capital de fondo de garantía se formará:

1.º Con una aportación inicial del Estado, deducida de la subvención que concede a las Mutualidades que practiquen el seguro, y en cuantía no inferior a 500.000 pesetas.

2.º Con aportaciones sucesivas en cada ejercicio aplicadas a la misma consignación, en cantidad no inferior a 25.000 pesetas.

3.º Con las subvenciones que pueden conceder los Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales.

4.º Con los donativos de los particulares.

5.º Con las multas sancionadas en este reglamento.

6.º Con los ingresos que pudieran corresponderle en los casos previstos en el artículo 79.

Artículo 128. El fondo especial de garantía sólo responde en caso de insolvencia del patrono, Sociedades de Seguros o Mutualidades patronales, del pago de indemnizaciones declaradas por sentencia judicial, decisión arbitral o laudo de amigables componedores.

Artículo 129. La declaración de insolvencia del patrono o entidad que le sustituya en sus obligaciones, y los deberes y derechos consiguientes del fondo especial de garantía, se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 313 a 329, ambos inclusive, del Código de Trabajo.

Artículo 130. La administración del fondo especial de garantía consistirá en la incorporación al mismo de las cantidades que el Instituto Nacional de Previsión perciba, procedentes de las aportaciones del Estado, Provincias, Municipios y particulares, y multas; en el pago de las indemniza-

ciones que procedan, una vez publicada la declaración de insolvencia, y en la custodia de la suma, en todo momento disponible, que constituya dicho fondo especial.

Artículo 131. Las operaciones de la gestión administrativa del fondo especial de garantía se reflejarán en una cuenta corriente que el Instituto Nacional de Previsión llevará al mismo fondo, en el cual serán cargo las cantidades recibidas y data las indemnizaciones pagadas.

Artículo 132. Anualmente el Instituto Nacional de Previsión formará y remitirá al Ministerio de Trabajo y Previsión un estado de situación del fondo especial de garantía, en el cual se demuestren las cantidades recibidas y las pagadas durante el último ejercicio y el saldo disponible al finalizar, justificándolo con la relación detallada de las indemnizaciones satisfechas, expresiva del nombre del accidentado, el del patrono insolvente, la fecha del auto declarativo de la insolvencia y autoridad que lo dictó.

Artículo 133. En el caso de que en cualquier momento no existiera fondo disponible para atender al pago de las indemnizaciones declaradas, quedará el pago en suspenso hasta el ingreso de cantidades suficientes, informándose inmediatamente al Ministerio de Trabajo y Previsión, acerca de las causas determinadas a que, a su juicio, obedezca la suficiencia y de los medios que se pudieran adoptar para solucionar el conflicto y evitar la posible repetición de lo futuro.

Artículo 134. El estado consignará en sus presupuestos la cantidad que se estime suficiente, destinada:

1.º A subvencionar las Mutualidades constituidas conforme al presente reglamento y que atiendan al pago de indemnizaciones en la proporción que determine el Ministerio de Trabajo y Previsión, mediante las condiciones, garantías y procedimientos que señala este reglamento, destinándose especialmente las subvenciones a cubrir los gastos de administración de las mutualidades conforme a lo dispuesto en el artículo 100; y

2.º A satisfacer los gastos que exija el sostenimiento de los servicios que se confían al Instituto Nacional de Previsión y al Consejo de Trabajo, determinados en la ley y en este reglamento.

CAPITULO V

RECLAMACIONES

Artículo 135. El obrero víctima del accidente, o la persona o personas interesadas, tiene derecho a reclamar ante las Autoridades gubernativas y a demandar al patrono o a la Mutualidad en su caso, ante el Tribunal Industrial, donde exista, o, en su defecto, ante el Juzgado de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el Código de Trabajo.

Artículo 136. Prescribirán al año las acciones para reclamar el cumplimiento de las disposiciones de este decreto.

El término de la prescripción estará en suspenso mientras se siga sumario o pleito contra el presunto culpable, criminal o civilmente, y empezará a contarse desde la fecha del auto de sobreseimiento o de la sentencia absolutoria.

También se interrumpirá el plazo de la prescripción en el caso de hernias, mientras se realiza la información médica determinada para este caso en este reglamento.

Artículo 137. El plazo de un año para la prescripción de las acciones empezará a contarse desde la fecha en

que ocurra el accidente. Si éste no hubiera determinado, desde luego, la clase de incapacidad que debe ser indemnizada con arreglo a la ley, el plazo podrá empezar a contarse a partir del día en que la incapacidad se hubiese declarado específicamente.

Los plazos correrán a un tiempo para los responsables principales y para los subsidiarios. La demanda o cualquier otro acto contra los primeros no interrumpirá la prescripción de la acción para reclamar, en su caso, contra los segundos, si éstos no hubiesen sido demandados, citados judicialmente requeridos, o advertidos directa y expresamente en forma legal e indubitada dentro del mismo plazo.

Solamente las causas o pleitos de culpabilidad suspenderán el término de la prescripción para unos y otros, dentro de los conceptos precisos del segundo párrafo del artículo anterior.

Artículo 138. Las reclamaciones que se formularan de daños y perjuicios por hechos distintos de los previstos en este reglamento o en que medie culpa o negligencia perseguible civilmente, estarán sujetas a las prescripciones de derecho común. Si los hechos constituyeren delito o falta, con arreglo al Código penal, conocerán de ellos en el juicio correspondiente las autoridades judiciales competentes, según la ley.

Si los Jueces o Tribunales de lo criminal acordaran el sobreseimiento o la absolución del procesado, quedará expedito al interesado el derecho para reclamar la indemnización de daños y perjuicios, conforme a las disposiciones de este reglamento, considerándose interrumpido, en tal caso, el término para la prescripción durante el tiempo de la tramitación del procedimiento criminal.

Estas disposiciones son aplicables tanto al patrono como al obrero.

Artículo 139. Los beneficios otorgados por el decreto de 12 de Junio de 1931, y por el presente reglamento, no podrán ser renunciados, siendo nulos todos los pactos o actos jurídicos contrarios a sus disposiciones, salvo lo que pueda convenirse en el antejuicio o durante el curso de las reclamaciones formuladas ante los Tribunales industriales por avenencia entre las partes.

Artículo 140. En el procedimiento y tramitación de reclamaciones por accidentes del trabajo en la agricultura, se estará a lo dispuesto en el Código de Trabajo para lo relativo a dichos accidentes en la industria.

La reclamación ante la Autoridad administrativa tendrá lugar siempre que el patrono omita dar conocimiento en forma del accidente, o no cumpla las obligaciones legales en caso de éste.

Los hechos que no constituyan incumplimiento de la ley, si no diferencia de fondo entre las partes, serán objeto de demandas ante el Tribunal Industrial o Juzgado que haga sus veces.

En los casos señalados en el artículo 138 en que se alegue dolo, imprudencia o negligencia que produzca el accidente, se acudirá directamente por escrito al Juez de instrucción.

La justicia se administrará gratuitamente en las contiendas que surjan de la aplicación del presente reglamento.

Artículo 141. Todas las reclamaciones que se formulen por el obrero o sus causabientes, así como las certificaciones y demás documentos que se expidan a los mismos, tanto con ocasión de la aplicación de las disposiciones fundamentales como de las

reglamentarias, se extenderán en papel común.

CAPITULO VI

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Artículo 142. El Ministerio de Trabajo y Previsión, pidiendo, si lo estimare conveniente, el informe del Consejo de Sanidad y de la Academia de Medicina, y en todo caso el del Consejo de Trabajo, dictará los reglamentos y disposiciones oportunas para hacer efectiva la aplicación de los mecanismos y demás medios preventivos de los accidentes del trabajo, y las medidas de seguridad e higiene que considere necesarias.

Artículo 143. La inspección de cuanto corresponde a la higiene y seguridad del obrero en los trabajos a que se refiere el capítulo primero de este reglamento, corresponde a la Inspección del Trabajo.

Artículo 144. Los patronos agrícolas a quienes alcanzan la definición y enumeraciones de este reglamento, tienen el deber de emplear todas las medidas posibles de seguridad e higiene del trabajo en beneficio de sus obreros.

Artículo 145. Se considerarán, desde luego, como medidas generales de indispensable adopción, las enumeradas en el artículo 246 del Código de Trabajo, en cuanto sean susceptibles de aplicación a la agricultura, las que se dicten en lo sucesivo, las modificaciones a que dieran lugar los progresos de la ciencia y de los procedimientos de trabajo, las reglas de seguridad e higiene de carácter general y las particulares que puedan dictarse acomodándose a las condiciones especiales de las explotaciones y labores agrícolas.

Artículo 146. Será causa de responsabilidad para los patronos el incumplimiento de las medidas de previsión de accidentes y de higiene del trabajo, a que hace referencia este capítulo, y las disposiciones que se dicten.

La adopción de las medidas de seguridad e higiene no dispensa al patrono del pago de las indemnizaciones que la ley determina, teniéndose en cuenta únicamente para apreciar la responsabilidad civil o criminal que pudiera existir.

La adopción de cualquier clase de medio preventivo para disminuir el riesgo propio de cada trabajo, se aplicará con la mira de defender también al obrero contra las imprudencias que son consecuencia forzosa del ejercicio continuado de su trabajo, que por sí o por las circunstancias de su ejecución, puede ser peligroso.

Artículo 147. La falta de medidas preventivas en el grado e importancia previstos reglamentariamente, así como el incumplimiento de los preceptos del Real decreto de 25 de Enero de 1908, que clasifica las industrias y trabajos prohibidos, total o parcialmente, a los niños menores de dieciséis años y a las mujeres menores de edad, motivará que se aumente en una mitad las indemnizaciones que correspondan a los obreros, con independencia de todas clases de responsabilidades.

La prevención de los accidentes es obligatoria, en un grado máximo cuando se trate de trabajo realizado por mujeres, cualquiera que sea su edad, o por varones menores de dieciocho años, debiendo darse especial cumplimiento al Real decreto de 25 de Enero de 1908, que prohíbe su trabajo en determinadas industrias.

Artículo 148. Se declararán faltas

de previsión el empleo de máquinas y aparatos en mal estado, la ejecución de una obra o trabajo con medios insuficientes de personal o de material y utilizar personal inepto en obras peligrosas sin la debida dirección.

Artículo 149. Corresponde a los Inspectores de Trabajo velar por el cumplimiento de las disposiciones concernientes a la previsión de los accidentes e higiene del trabajo. La práctica del servicio inspectivo, tramitación de actas y documentos, imposición de multas, exacción y destino, recursos y demás extremos relacionados con dichas disposiciones y las que se dicten en lo futuro, se realizarán según las normas generales del mencionado servicio, consignadas en el reglamento de 8 de Mayo de 1931.

CAPITULO VII

SANCIONES

Artículo 150. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley y en su reglamento, lo mismo por parte de los patronos que por parte de las Mutualidades o Compañías aseguradoras, serán castigadas con las sanciones que establecen los artículos siguientes:

Artículo 151. El patrono que no diere a las Autoridades correspondientes los partes o informaciones reglamentarios, relativos a los accidentes del trabajo ocurridos, o los diere fuera de los plazos señalados, incurrirá en multa de 25 a 100 pesetas.

Artículo 152. Los patronos, Mutualidades o Compañías de Seguros que no presenten en los Gobiernos civiles o Ayuntamientos, el parte de baja y hoja declaratoria de los accidentes del trabajo ocurridos, acompañados de un boletín estadístico donde se consignarán con la mayor exactitud los datos respectivos, serán castigados con la multa de 25 a 100 pesetas.

Artículo 153. El patrono que no haga el seguro en el plazo reglamentario o no lo renueve oportunamente, o no lo complete en caso de aumento de número de obreros declarado primeramente; el que cometa falta intencionada de exactitud en las declaraciones para el seguro, exija a los obreros directa o indirectamente, todo o parte de las cuotas del seguro e incurra en falta de pago de estas mismas cuotas después de formulados los oportunos requerimientos por las Autoridades, será castigado con multa de 25 a 100 pesetas.

Artículo 154. El incumplimiento de los preceptos reglamentarios referentes a la aplicación de los mecanismos y medios preventivos de los accidentes de trabajo y de las medidas de higiene y seguridad establecidas, se castigarán independientemente de la responsabilidad civil o criminal que proceda, con multa de 25 a 250 pesetas; en caso de primera reincidencia, con multa de 250 a 500, y en segunda reincidencia, con multa de 500 a 1.000 pesetas; multas que se aplicarán al grado máximo cuando, a juicio de la Inspección, pudieran ser gravísimos e inminentes los accidentes derivados de la inobservancia del reglamento.

Artículo 155. Los infractores del Real decreto de 25 de Enero de 1908, relativo a las industrias y trabajos prohibidos a los niños menores de diez y seis años y mujeres menores de edad, se corregirán con multa comprendida en los grados medio al máximo de las señaladas en el artículo anterior.

Artículo 156. Los actos de obstrucción se castigarán con multa de 250 pesetas, siempre que tengan lugar en

ocasión de visitas a explotaciones, obras o labores en que por la naturaleza del trabajo sea presumible, a juicio del Inspector, la posibilidad de accidente; para que pueda cumplirse este precepto, el Inspector consignará aquel juicio en el oficio de remisión del acta.

Se considerará como obstrucción al Servicio de Inspección del trabajo:

1.º La negativa de entrada a los centros de trabajo, aun cuando éstos se hallen instalados dentro del domicilio particular del patrono.

2.º La negativa o resistencia, aunque sea pasiva, a presentar libros registros del personal e informes relativos a las condiciones del trabajo.

3.º La ocultación del personal obrero.

4.º Las informaciones falsas.

5.º Cualquier otro acto que impida, perturbe o dilate el servicio de inspección.

Las reincidencias repetidas en la obstrucción, así como las infracciones, podrán motivar el cierre del centro de trabajo donde se produzcan, hasta que la inspección se verifique sin el menor obstáculo, y se cumplan los preceptos legales infringidos, levantando de ello acta.

Dicho cierre se decretará por la Autoridad competente, a propuesta del Consejo de Trabajo, motivada por el resultado del expediente instruido al efecto.

Artículo 157. Cualquier infracción, en general, de los preceptos de la ley o de los dictados para su cumplimiento, no comprendidos expresamente en los artículos anteriores, será objeto de multa de 25 a 100 pesetas.

Artículo 158. Para todo lo relativo a inspección, señalamiento y manera de hacer las sanciones efectivas y recursos que puedan entablar los interesados, se estará a lo dispuesto en el Código de Trabajo en materia de accidentes, y reglamento del Servicio de Inspección.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 159. Tanto las Mutualidades a que se refiere este reglamento como el Instituto Nacional de Previsión, estarán exentos de todas clases de impuestos por los actos y contratos relativos a la aplicación del presente reglamento, librándose y expidiéndose gratuitamente por las Autoridades todos los documentos que se relacionen con dicha aplicación.

Artículo 160. En todo lo no previsto en este decreto, se estará a lo que dispone el Código de Trabajo, cuyas disposiciones tendrán valor supletorio para todo lo relativo a los accidentes del trabajo ocurridos en la agricultura.

Artículo 161. Las Mutualidades que están obligadas a formar los patronos, habrán de ser constituidas por éstos dentro de un plazo de tres meses, a contar de la publicación del presente reglamento.

Las disposiciones de éste entrarán en vigor al terminar el indicado plazo.

Aprobado por el Gobierno de la República.

Madrid, 25 de Agosto de 1931.—El Ministro de Trabajo y Previsión, Francisco Largo Caballero.

(Gaceta del 30 de Agosto.)

Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos públicos

CONCURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1931

Destinos vacantes a proveer en concurso entre las clases e individuos de tropa del Ejército y Armada, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto-ley de 6 de Septiembre de 1925, Decreto de 19 de Octubre de 1930, reglamento para la aplicación del primero y disposiciones complementarias del segundo.

Relación de los destinos vacantes dependientes de los Departamentos ministeriales, Centros y Dependencias del Estado y de Corporaciones provinciales y municipales que, por haber quedado estos últimos desiertos, conforme a lo prevenido en la 13.ª disposición complementaria de la Orden circular de 29 de Diciembre de 1930 (Gaceta de 3 de Enero de 1931), habrán de ser solicitados del Excmo. Sr. Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos públicos desde el día de su publicación hasta el 30 de Septiembre de 1931.

Relación de los destinos vacantes dependientes de las Diputaciones, Cabildos y Ayuntamientos, que habrán de ser solicitados de los señores Presidentes de las respectivas Corporaciones desde el día de su publicación hasta el 30 de Septiembre próximo.

PROVINCIA DE SEGOVIA

Ayuntamiento de Cantalejo

198. Dos serenos, a 1.306,25 pesetas anuales (primera categoría).

199. Alguacil, con 750 pesetas anuales (primera categoría).

200. Pregonero, con 0,75 pesetas diarias (primera categoría). Los pregoneros oficiales serán gratuitos.

Ayuntamiento de Turégano

201. Alguacil municipal, con 828 pesetas anuales, casa y luz (primera categoría).

Instrucciones a que han de ajustarse los individuos procedentes del Ejército y Armada que soliciten destino público.

Condiciones generales para solicitar destino

Edad.—1.º Ser mayor de veinticuatro años.

2.º Los de activo, no exceder de treinta y cinco.

3.º Los de las restantes situaciones, no exceder de cuarenta y seis años, y los retirados no exceder de cincuenta y dos.

Se entiende que estos límites de edad es para los destinos que no tengan otra señalada al publicar el concurso y se considerarán cumplidas en la fecha de la publicación de las vacantes en la Gaceta.

Servicios.— Haber cumplido la primera situación de servicio activo y permaneciendo en filas, como mínimo cinco meses, a excepción de los inutilizados en campaña o en actos del servicio, a los cuales no se les exige tiempo mínimo, a cuyo efecto los Jefes de Cuerpo harán constar esta circunstancia en el estado-resumen de sus servicios militares.

Los que se encuentren en activo servicio, haber cumplido el segundo compromiso o tres meses antes de cumplirlo.

Naturaleza o vecindad.— Ser natural o vecino, con más de dos años de residencia, para solicitar los destinos

que al anunciarse sus vacantes se exija esta condición por pagados con fondos provinciales o municipales, anunciados para cubrir por las Corporaciones provinciales o municipales.

Exceptuados.—No podrán solicitar destino:

1.º Los que no acrediten saber leer y escribir (si no constan en sus filiaciones estas circunstancias).

2.º Los expulsados del Ejército o Armada.

3.º Los que hayan sufrido más de dos meses de arresto militar por faltas en el servicio militar y tengan la nota sin invalidar.

4.º Los que en su hoja de antecedentes penales conste que han sido condenados a penas aflictivas o correccionales, salvo en el caso de que hayan sido rehabilitados por precepto legal.

5.º Los que por dos veces hayan dejado de tomar posesión de los destinos que se les haya adjudicado por la Junta, o que, después de posesionados, hayan renunciado por segunda vez, si no estuvieran rehabilitados.

Reglas para solicitar destino y clasificación de servicios

Petición de destino.—Se hará en papeleta con arreglo al formulario número 1, que se acompaña, cursándola los que se encuentren en activo servicio por conducto de los Jefes de los Cuerpos respectivos, y los demás aspirantes por conducto del Alcalde de la localidad donde resida, informando dichas Autoridades, en cada caso, al respaldo de la papeleta, la buena o mala conducta y tiempo de residencia en la localidad del interesado, el que acompañará dicha papeleta, cuando solicite destino de las Corporaciones provinciales o municipales, una copia del resumen de servicios que obra en su poder, visada por el Comisario de Guerra o Marina o por el Alcalde, en su defecto.

Número de destinos que pueden solicitarse.—Cuando en el anuncio de las vacantes se considere que éstas deben solicitarse de los Ayuntamientos, Diputaciones y cabildos insulares, podrán incluir en la petición hasta diez destinos de los anunciados, por el orden correlativo de preferencia que deseen, en papeletas independientes, dirigidas a cada una de las respectivas Autoridades, pudiendo exigir recibo de la documentación presentada.

Quando en el anuncio de las vacantes se consigne que deben solicitarse del Presidente de la Junta, se incluirán en una sola y exclusiva papeleta, por orden de preferencia, los destinos que deseen, pudiendo pedir hasta diez de los comprendidos en cada uno de los diferentes conceptos por el que figuren en la relación general del concurso, siempre que tengan derecho a ellos.

Clasificación de servicios.—Para solicitar la clasificación de servicios, los que se encuentren en activo servicio lo harán por conducto del Jefe de su Cuerpo, con arreglo al modelo número 2 que se acompaña, y cada vez que pidan destino.

Los restantes, cualquiera que sea la situación militar en que se encuentren, lo harán una sola vez para ser clasificados por la Junta y lo solicitarán con arreglo al mismo formulario, directamente del Jefe de su Cuerpo, si éste reside en la localidad del interesado; en caso contrario, por conducto del Gobierno militar o Comandante de Marina, y si no los hubiere, por conducto del Alcalde de la localidad. Acompañarán a la solicitud una copia del documento militar que

tengan en su poder, debidamente visado por el Comisario de Guerra o Marina, o, en su defecto, por el Alcalde del pueblo de su residencia.

Documentos que han de acompañar a las papeletas de petición de destino

Certificados: De suficiencia.—Los que aspiren a destinos de segunda y tercera categoría y no sean Cabos o Sargentos, ni conste en sus filiaciones hayan sido declarados aptos para estos empleos, solicitarán del Gobierno militar o Autoridad de Marina, según su procedencia, y a fin de que se les expida el correspondiente certificado, en el que se consignarán los conocimientos que posean.

De aptitud física.—Los inutilizados, acompañarán a su petición certificado de aptitud física para el desempeño del destino, cuyo certificado será expedido por el Tribunal médico-militar designado por los Gobernadores militares o por los Comandantes de las plazas de Marina.

De talla.—Para los destinos que se exija una determinada talla, el certificado referente a éste será expedido por la Autoridad militar o por el Alcalde, en su defecto.

De otros certificados.—En aquellos destinos para los cuales se exijan ciertos conocimientos de arte u oficio, etcétera, los interesados se proveerán de un certificado expedido por centro o establecimiento oficial adecuado o por un técnico matriculado en la materia objeto del certificado, o, en su defecto, por persona que dirija fábrica o establecimiento en el cual se realicen trabajos del oficio o arte de que se trate. Cuando los certificados no sean expedidos por centro o establecimiento oficial, serán visados por el Alcalde o Teniente de Alcalde del distrito, y deberán venir debidamente reintegrados.

Todos estos certificados deberán solicitarlos los interesados con la debida antelación, para que sean acompañados a las papeletas de petición de destino.

Advertencias generales.

1.ª Quedarán fuera de concurso:

a) Las peticiones de destino que estén mal documentadas.

b) Las que tengan entrada en la Secretaría de la Junta o en el Registro de la Corporación de la que se solicite el destino con posterioridad al 31 de Agosto próximo.

c) Las que en la fecha que indica el párrafo anterior no hayan tenido entrada la clasificación de servicios y documentos anexos prevenidos en cada caso para la calificación del peticionario, según previene el artículo 54.

d) Los que habiendo estado sujetos a procedimiento judicial no acompañen a las papeletas de petición de destino su certificado de antecedentes penales expedido por el Registro de Penados y Rebeldes.

2.ª Los individuos que obtengan destino con arreglo al reglamento, no podrán solicitar otro hasta transcurrido el plazo de dos años desde la fecha del concurso en que se les fué concedido, salvo los destinos de oposición, a cuyas convocatorias podrán concurrir sin limitación de tiempo.

3.ª Los que estén desempeñando destino, al solicitar otro nuevo, con arreglo al párrafo anterior, en la papeleta de solicitud certificará el Jefe de la dependencia que en efecto lo desempeña en el día de la fecha, y el concepto que le merece la actuación del funcionario.

FORMULARIO NUMERO 1

Póliza
correspondiente

Concurso del mes de de 19...
 Primer apellido Nombre Empleo militar
 Segundo apellido Hijo de y de
 Excmo. Sr. Presidente de la Junta Calificadora: El que suscribe, con cédula personal de clase, núm., natural de provincia de y domiciliado en provincia de desea obtener un destino de los anunciados a concurso en el mes actual, por el orden de preferencia que sigue:
 Número (1)
 (2)
 (3) de de 19...

- (1) Poner solamente el número de los destinos que pretenda y por orden de preferencia.
 (2) Se agregará la circunstancia de preferencia de naturaleza o vecindad, cuando así ocurra y siempre que figure en primer término el número del destino correspondiente.
 (3) Consignar la fecha en que se solicitó la documentación militar y Cuerpo, Autoridad o Centro a quien corresponda expedirla.

FORMULARIO NUMERO 2 (I)

Póliza
correspondiente

Fulano de tal y tal (empleo), (licenciado o en activo), natural de provincia de y domiciliado en provincia de hijo de y de a V. S. suplica se expida y remita a la Junta Clasificadora de Aspirantes a Destinos Públicos el estado-resumen de su filiación y servicios prevenido, para ser calificado, siendo adjunta una copia de (2)
 de de 19...
 Señor Jefe del (Batallón o Regimiento) de Reserva de

- (1) Los interesados deberán hacerlo en forma de instancia.
 (2) La octava página de la cartilla militar, pase, licencia absoluta o propuesta de retiro.

4.^a Los que al solicitar destino hubieran cesado en otro concedido con anterioridad, deberán acompañar a la papeleta de petición un documento autorizado por el Jefe de la misma dependencia en que prestara sus servicios, en el que conste la fecha del cese, los motivos a que obedeció y la conducta observada por el interesado en el desempeño del cargo.

5.^a Los que no hubieran tomado posesión de un destino y soliciten otro nuevo, harán constar en la papeleta esta circunstancia, en la inteligencia que la omisión de este requisito o la falta de veracidad en sus manifestaciones motivará la eliminación del interesado del concurso de que se trate y la imposición de la sanción que la Junta acuerde, según la gravedad del caso.

6.^a Las autoridades encargadas de cursar la documentación lo harán con la menor demora posible, a fin de evitar los naturales trastornos, procurando que las instancias y documentos estén debidamente reintegrados y dejando sin curso las que carezcan de los requisitos anteriormente señalados.

7.^a Los individuos procedentes del Tercio, al solicitar destino público, deberán remitir documento que justifique la situación militar en que se encuentren con respecto a su edad; y si fuesen extranjeros harán constar además que se hallan nacionalizados en España, acompañando el correspondiente certificado de su inscripción en el respectivo Registro civil.

8.^a Con el fin de evitar extravíos se hace presente a las autoridades y concursantes la conveniencia de no remitir documentos originales (sino copias debidamente autorizadas), excepto en los certificados que se exijan para el desempeño de destino en los que se pida este requisito.

9.^a Se advierte a los propuestos

que, según determina la quinta disposición del reglamento de 6 de Febrero de 1928 (*Gaceta* del 9), sobre provisión de destinos públicos, una vez tomen posesión de sus destinos, cuando quede firme la propuesta, dependerán única y exclusivamente del centro o dependencia donde presten sus servicios, teniendo los mismos derechos y deberes que los demás funcionarios de su clase, rigiéndose por los mismos reglamentos orgánicos que tengan aprobados las Corporaciones o haya dictado la Superioridad para su régimen.

10.^a Para todo cuanto no se detalle en estas instrucciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en el reglamento antes citado y en las instrucciones complementarias al Decreto de 19 de Octubre de 1930, publicado en la *Gaceta* de 3 de Enero de 1931.

Madrid, 26 de Agosto de 1931.—El Presidente accidental, Juan Vaxeras.

(*Gaceta* del 1.º de Septiembre).

Consultas Públicas Provinciales completamente gratuitas

Consulta de Puericultura y enfermedades de los niños de pecho.—(*Gota de Leche*). Martes, de cuatro a cinco de la tarde, y sábados, de doce a una.

Enfermedades cancerosas.—Hospital de la Misericordia.—Martes y sábados, a las nueve de la mañana.

Enfermedades venéreas y sifilíticas.—Dispensario antivenerico anejo al Hospital de la Misericordia.—Consulta para hombres: todos los días, a las seis de la tarde.

IMPRENTA PROVINCIAL